



PLURAL

joven

Año V - No.7
Abril 2024

Revista electrónica del Centro
de derecho internacional e
integración regional CIDIIR
MDQ, Argentina

Universidad Nacional de Mar del Plata

Centro de Investigación en Derecho Internacional e Integración Regional

REVISTA PLURAL

Joven

Año V, Número VII – Abril 2024

Centro de Investigación en Derecho Internacional e Integración Regional

Universidad Nacional de Mar del Plata

Facultad de Derecho 2855/65 – Piso 3 – 7600

Mar del Plata – Argentina

Revista Electrónica – Año 5 – N. 7

Director: Favio Farinella

Abril 2024 – ISSN 2684-0431

Tapa: Homenaje al pintor Jacob Epstein

REVISTA PLURAL Joven

Abril de 2024 – ISSN 2684-0431

Publicada por:

Centro de Investigación en Derecho Internacional e Integración Regional @cidiir

Mar del Plata, República Argentina

DIRECTOR

Favio Farinella

CONSEJO EDITORIAL

Eduardo Hooft

Pedro López Martucci

Ana Vernetti

Gabriel Raba

Mariel Martin

COORDINACIÓN

Romina Manzo

EDICIÓN

Romina Manzo

Manuel González

Belén Morrone



SUMARIO

EDITORIAL

- 5 **REVISTA PLURAL** *Joven*
Manzo, Romina

SECCIÓN INVESTIGACIÓN

- 8 **LA UTILIZACIÓN DE DRONES NO TRIPULADOS EN CONFLICTOS ARMADOS. ANÁLISIS DE SU LEGALIDAD DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO**
Guillermo Liebig
- 17 **EL DARIÉN: SOULS THAT LUNG, FEET THAN BLEED**
Enrique Ernesto Fernández Puentes

SECCIÓN VISIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL

- 26 **A PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E O DIREITO À ALIMENTAÇÃO: UMA ANÁLISE DE DIREITO COMPARADO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA ARGENTINA**
Lais Helena Pacheco Silva
- 47 **A EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO AMBIENTAL INTERNACIONAL E O CONTEXTO BRASILEIRO E ARGENTINO**
Luis Enrique Dutra Mageste
- 69 **IMPLEMENTATION AND PROTECTION OF CHILD RIGHTS IN SRI LANKA A HISTORICAL OVERVIEW**
Raveenthiran Vivekanantharasa

Les damos la bienvenida a una nueva entrega de la Revista Plural Joven.

El presente número se caracteriza por su contenido y análisis críticos, llevado a cabo por autores comprometidos, cada uno en su área de especialidad. A su vez, esta edición se encuentra atravesada por la multiculturalidad. Nos acompañan estudiosos de diversas partes del mundo, lo cual permite apreciar nuevas ópticas y líneas de pensamiento que invitan a un marco de estudio y reflexión permanentes.

La comunidad internacional atraviesa grandes desafíos y transformaciones, tiempos de cambio caracterizados por un paradigma que plantea nuevas estructuras y modelos de actuación. El estudio y compromiso en materia de preservación, garantía y protección de los derechos humanos, resulta fundamental para el presente devenir histórico. Ello en vistas de promover un pensamiento crítico que fortalezca los valores fundamentales que conforman los pilares sobre los cuales se asienta la propia Carta de Naciones Unidas. La proyección de un compromiso global de paz, hoy más que nunca, requiere de su confirmación y promoción.

A lo largo del presente recorrido, cada autor analizará las connotaciones fundamentales de las temáticas propuestas, invitando a un espacio de enriquecimiento y reflexión.

En primer lugar, Guillermo Liebig nos invita a reflexionar sobre la utilización de vehículos aéreos no tripulados en los conflictos armados y la necesidad de su abordaje desde la óptica del Derecho Internacional Humanitario. Hoy en día, la falta de una regulación clara en la materia ha dado lugar a una situación de incertidumbre jurídica que requiere de su análisis con premura. A tales efectos, el autor examinará detalladamente la doctrina y jurisprudencia relevantes, con el objetivo de arrojar luz sobre este complejo panorama.

Continuamos nuestro camino junto a Enrique Ernesto Fernández Puentes, quien analiza la crisis migratoria en la frontera Panamá – Colombia, sus causas y el peligroso viaje que emprenden los migrantes para alcanzar el “Sueño Americano”. Detallará la base jurídica del derecho internacional de migrantes y refugiados, describiendo los instrumentos jurídicos internacionales clave y los organismos internacionales que velan por sus derechos.

Seguidamente, e iniciando la Sección “Visión jurídica internacional”, nos acompaña Lais Helena Pacheco Silva. La autora reflexiona sobre la protección de niños y adolescentes dentro del sistema normativo de la República Argentina y la República Federativa del Brasil, previendo como eje central de trabajo, el derecho de acceso a una alimentación adecuada para los infantes. Se pregunta, ¿cómo se vincula el derecho a la alimentación con la protección de la niñez? ¿Cómo internalizó cada sistema jurídico este tema? Ambos interrogantes se analizarán desde dos dimensiones: los derechos de los niños y adolescentes y la defensa del derecho a la alimentación.

A continuación, Luis Enrique Dutra Mageste se plantea como objetivo analizar la evolución de la protección ambiental a nivel internacional en medio de las transformaciones sociales provocadas a partir del siglo XX, que acentuaron significativamente la explotación del medio ambiente a través de recursos tecnológicos. Su eje de trabajo se ha de centrar en analizar el marco jurídico desarrollado por parte de los Estados de Brasil y de Argentina a efectos de garantizar el desarrollo sostenible para las generaciones presentes y futuras.

Finalmente, el Dr. Raveenthiran Vivekanantharasa, realiza una descripción histórica del desarrollo de los derechos de los niños en Sri Lanka desde siglo XVI hasta la actualidad. Especialista en su área, se centra en analizar cómo se implementan y protegen los derechos del niño en el mencionado Estado, del cual resulta ser nacional. Prestará principal atención al papel fundamental que ejerce su Nación en materia de salvaguarda y desarrollo de la niñez y generaciones futuras.

Les agradecemos cordialmente a los autores y participantes de este número, como así también a nuestros lectores. Ambos configuran la esencia y calidez de este maravilloso espacio.

Romina Manzo
Coordinadora Revista Plural Academia

SECCIÓN INVESTIGACIÓN

LA UTILIZACIÓN DE DRONES NO TRIPULADOS EN CONFLICTOS ARMADOS. ANÁLISIS DE SU LEGALIDAD DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Guillermo Liebig

Resumen

En los últimos años, la proliferación y el uso cada vez más frecuente de vehículos aéreos no tripulados (VANT), comúnmente conocidos como "drones", en conflictos armados ha generado un intenso debate a nivel político, social y jurídico. Este fenómeno ha suscitado preocupación debido a las considerables pérdidas materiales y humanas asociadas, al tiempo que ha revelado una notable laguna normativa en la regulación de su uso.

En este contexto, la comunidad internacional ha mostrado un creciente interés en abordar esta problemática desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, la falta de una regulación clara ha dado lugar a una situación de incertidumbre jurídica, la cual será objeto de análisis en el presente artículo. Para ello, se examinará detalladamente la doctrina y la jurisprudencia relevantes, con el objetivo de arrojar luz sobre este complejo panorama y ofrecer una conclusión reflexiva por parte del autor.

Palabras clave

Drones - Derecho Internacional Humanitario - Legalidad - Conflictos Armados - Convenios de Ginebra - Cláusula Martens.

USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN ARMED CONFLICTS: ANALYSIS OF THEIR LEGALITY CONSIDERING INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

Abstract

In recent years, the proliferation and increasingly frequent use of unmanned aerial vehicles (UAVs), commonly known as "drones," in armed conflicts have sparked intense debates at political, social, and legal levels. This phenomenon has raised concerns due to the significant material and human losses associated with it, while also revealing a notable regulatory gap in their usage.

In this context, the international community has shown a growing interest in addressing this issue from the perspective of International Humanitarian Law. However, the lack of clear regulation has led to a situation of legal uncertainty, which will be the subject of analysis in this article. To do so, the relevant doctrine and jurisprudence will be examined in detail, with the aim of shedding light on this complex landscape and offering a reflective conclusion from the author.

Key words

Drones – International Humanitarian Law – Law – Armed Conflicts –
Geneva Conventions – Martens Clause

1. Introducción

Durante las últimas dos décadas, la tecnología ha tomado un papel preponderante y activo. Las investigaciones y los avances en Inteligencia Artificial han logrado desarrollar sistemas operativos autónomos, capaces de funcionar sin intervención humana. Es notable destacar los recientes avances en Androides y Robótica, alcanzando niveles que solo se veían en películas de ciencia ficción. En el ámbito militar, los progresos en nanotecnología e informática han posibilitado la creación de vehículos aéreos no tripulados (VANT o UAV

por sus siglas en inglés) cuya reciente utilización en los conflictos bélicos de Rusia y Ucrania¹, Israel y el grupo Hamas², ha desatado una enorme conmoción por la gran cantidad de pérdidas materiales y humanas producidas.

Durante siglos, la guerra fue considerada como un medio legítimo para resolver disputas entre los sujetos de derecho internacional, es decir, entre Estados. Este concepto dio lugar al desarrollo del llamado *ius ad bellum*, que se refiere al derecho de cada Estado a garantizar su propia supervivencia. Dicha situación llevó a que los beligerantes adoptaran reglas destinadas a evitar daños innecesarios, conocidas como *ius in bello*, que consisten en los usos y costumbres que deben ser respetados por las partes en conflicto durante un enfrentamiento armado³.

Tras la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la creación de la ONU, se estableció en la Carta de la organización un compromiso solemne en su preámbulo, aspirando “*a preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra*”. En el art. 2, se dispuso de manera general el principio de la prohibición del uso de la fuerza: “*Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas*”. Este principio se vincula con el arreglo pacífico de las controversias entre los Estados, previsto en el art. 2.3 de la Carta, así como con el principio de seguridad colectiva contemplado en el art. 2.5. En este sentido se puede evidenciar que el objetivo principal de la ONU es salvaguardar la paz y seguridad internacionales⁴.

Las excepciones al principio de prohibición del uso de la fuerza están definidas en la misma Carta de las Naciones Unidas. El artículo 51 establece el derecho a la legítima defensa de los estados. Además, la Carta regula, en los artículos 39 a 50, la acción coercitiva de las Naciones Unidas en casos de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de

¹ El conflicto de Rusia y Ucrania tuvo su comienzo con la invasión de Rusia el 24 de febrero de 2022 por motivos políticos.

² El grupo Hamas es una organización político-militar palestina que es considerada como un grupo terrorista por varios países entre ellos EEUU e Israel. El 7 de octubre de 2023 el grupo Hamas inició un sorpresivo ataque contra el sur de Israel, respondiendo este país con la formal declaración de guerra y la autorización de acciones militares significativas contra los integrantes del mencionado grupo.

³ Díez De Velasco Vallejo Manuel, *Instituciones De Derecho Internacional Público*. Editorial Tecnos Madrid, 2007, pp 1067-1068.

⁴ Díez De Velasco Vallejo Manuel, *Instituciones De Derecho Internacional Público*. Editorial Tecnos Madrid, 2007, p. 1069.

agresión previstos en el Capítulo VII. Por otra parte, el artículo 107 de la Carta contempla la acción contra los estados enemigos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial⁵. A pesar de la vigencia del principio de prohibición del uso de la fuerza, han sido numerosos los conflictos armados y las acciones estatales que han recurrido a la fuerza militar.

2. El marco normativo aplicable a la problemática de la legalidad de la utilización de drones en conflictos armados. Análisis desde el Derecho Internacional Humanitario

Según la Real Academia Española un dron es un vehículo guiado de forma autónoma o mediante control remoto. Sin embargo, con los avances tecnológicos actuales, los drones suelen operar con la intervención tanto del piloto como del técnico de los sensores⁶. No obstante, al día de hoy ya se están creando drones que actúan de manera automática mediante sistemas operativos entrenados con patrones de conducta y estímulos. Los drones tienen una amplia gama de aplicaciones en conflictos armados. Pueden ser utilizados como medio de ataque, ya sea sustituyendo o complementando otros sistemas, o pueden emplearse para el control y la vigilancia, realizando tareas de reconocimiento del terreno a través de sus cámaras y recopilando información estratégica.⁷

La utilización de vehículos aéreos no tripulados en los conflictos armados es una temática que aún carece de una regulación específica en el ámbito del Derecho Internacional Público. Por lo tanto, es tarea de la doctrina y la jurisprudencia, esclarecer el marco normativo aplicable a estas situaciones complejas. En este contexto, el derecho internacional humanitario cobra relevancia.

Siguiendo la definición de Jean Pictet, el Derecho Internacional Humanitario en sentido amplio es “*el conjunto de disposiciones internacionales, escritas y consuetudinarias,*

⁵ Díez De Velasco Vallejo Manuel, *Instituciones De Derecho Internacional Público*. Editorial Tecnos Madrid, 2007, pp 1072-1090.

⁶ Garrido García Cristina, “Análisis sobre la utilización de drones en conflictos armados desde el Derecho Internacional Público”, en García Ferrando Francisca (dir), *Revista Anales De Derecho*, vol. 39, Murcia, Universidad de Murcia, marzo de 2022, p5.

⁷ Garrido García Cristina, “Análisis sobre la utilización de drones en conflictos armados desde el Derecho Internacional Público”, en García Ferrando Francisca (dir), *Revista Anales De Derecho*, vol. 39, Murcia, Universidad de Murcia, marzo de 2022, p6.

*que garantizan el respeto a la persona humana y a su desarrollo”, y en sentido estricto, es aquel que “tiende a salvaguardar los militares que se hallan fuera de combate, así como a las personas que no participan en las hostilidades”*⁸. La finalidad del DIH es limitar, por razones humanitarias, el derecho de las partes en conflicto a utilizar libremente métodos y medios de guerra. Además, busca proteger a las personas y los bienes afectados, o que puedan estar afectados, por el conflicto⁹.

El marco normativo internacional aplicable se fundamenta principalmente en los convenios adoptados en las Conferencias de la Paz, celebradas en La Haya en 1899 y 1907. Además, destacan los cuatro convenios de Ginebra suscritos en 1949, junto con sus Protocolos Adicionales.

Al analizar el ámbito de aplicación material de los convenios de Ginebra, la doctrina suele hacer una distinción entre los conflictos armados internacionales, internos e internacionalizados.

En primer lugar, los conflictos armados internacionales están mencionados en el Art. 2 de los Convenios de Ginebra de 1949. Estos conflictos incluyen las guerras declaradas o cualquier otro enfrentamiento armado entre dos o más Altas Partes Contratantes, incluso si una de ellas no ha reconocido el estado de guerra. También se aplican en casos de ocupación total o parcial del territorio de una Alta Parte Contratante, aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar. A partir de la adopción del Protocolo Adicional I de 1977, el concepto de conflicto armado internacional se ha extendido para abarcar situaciones en la que los pueblos luchan contra la dominación colonial, la ocupación extranjera o regímenes racistas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación.

Por otro lado, los conflictos internos o sin carácter internacional se regulan en el art. 3 común a los Convenios de Ginebra. Estos son conflictos que se desarrollan dentro del territorio de un Estado contratante entre dos grupos identificables, donde las partes contendientes deben respetar normas humanitarias mínimas. Además, el art. 1 del Protocolo II a los Convenios de Ginebra, define los conflictos armados internos como aquellos que se desarrollan en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas

⁸ Diez De Velasco Vallejo Manuel, *Instituciones De Derecho Internacional Público*, Editorial Tecnos Madrid, 2007, pp 1099.

⁹ Consani Norberto E. (Comp.Coord), *Manual Nuevos Desarrollos Del Derecho Internacional*, La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2016, p 367.

armadas disidentes o grupos armados organizados que ejercen un control sobre una parte del territorio y realizan operaciones militares sostenidas y concertadas.

Fuera de los conflictos armados internacionales y conflictos armados internos, existen situaciones en las que las partes enfrentadas no son fácilmente identificables. Estas tensiones internas y disturbios, pueden implicar violencia de cierta gravedad y duración, constituyendo lo que la doctrina denomina conflictos armados internacionalizados. Dado el carácter protector del DIH, el mismo resulta aplicable en estos casos¹⁰.

Luego de analizar el marco normativo, resta analizar cuáles son los principios que rigen el DIH. En primer lugar, debemos referirnos al principio de humanidad que establece que *las partes involucradas en un conflicto armado deben tratar justamente, con humanidad, en toda circunstancia y sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento, o la fortuna, o cualquier criterio análogo, así como también a las personas que no participen directamente en las hostilidades.*

En segundo lugar, se encuentra el principio de distinción o discriminación que dispone que *en todo momento durante las hostilidades se debe distinguir entre bienes civiles y población civil de los objetivos militares y los combatientes debiendo dirigirse los ataques contra estos últimos.*

En tercer lugar, se encuentra el principio de proporcionalidad que *establece que el daño causado por los ataques no debe exceder la ventaja militar específica que puedan obtenerse por medio de esos ataques.*

Como consecuencia del principio de discriminación se desprende el principio de necesidad o de última ratio que dispone que *el ataque a objetivos militares solo será posible cuando lo aconseje la necesidad militar, es decir, que se deberá actuar solo cuando sea estrictamente necesario y frente a quien son considerados objetivos militares*^{11 12 13}.

¹⁰ Consani Norberto E. (Comp.Coord), Manual Nuevos Desarrollos Del Derecho Internacional, La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2016, p 374-377.

¹¹ Díez De Velasco Vallejo Manuel, Instituciones De Derecho Internacional Público. Editorial Tecnos Madrid, 2007, pp. 1100-1101

¹² Garrido García Cristina, “Análisis sobre la utilización de drones en conflictos armados desde el Derecho Internacional Público”, en García Ferrando Francisca (dir), Revista Anales De Derecho, vol. 39, Murcia, Universidad de Murcia, marzo de 2022, p 14-19.

¹³ Consani Norberto E. (Comp.Coord), Manual Nuevos Desarrollos Del Derecho Internacional, La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2016, p 373-374.

Además de los principios fundamentales del DIH, debe agregarse la famosa Clausula Martens, denominada así en honor al jurista ruso que la propuso. Esta cláusula, se encuentra establecida en el preámbulo del Convenio IV de la Haya y en el art. 1.2 del Protocolo Adicional I que establece *“En los casos no previstos en el presente Protocolo o en otros acuerdos internacionales, las personas civiles y los combatientes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho de gentes derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública”*.

Autores de renombre como Jean Pictet sostienen que esta cláusula contiene normas que *“funcionan, en cierto sentido, como la espina dorsal de un cuerpo viviente, pues proporcionan líneas directrices para casos imprevistos y constituyen un resumen completo del conjunto, que es fácil de entender e indispensable a los fines de la difusión”*.

La Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva de 1996 sobre la licitud de la amenaza y empleo de armas nucleares, reconoció que: *“Es indudable que el hecho de que un gran número de normas del derecho humanitario aplicable en caso de conflicto armado sean tan fundamentales para el respeto de la persona y constituyan ‘principios elementales de humanidad’*”.

El Juez Shahabuddeen analizó profundamente la Cláusula Martens, en la mencionada opinión consultiva, destacando su atemporalidad y estableciendo que autorizaba a que los términos “principios de la humanidad” y “dictados de la conciencia pública” se tomarán como Principios del Derecho Internacional, cuyo contenido podría variar según la aceptación de los métodos y medios de guerra en diferentes épocas.

La Clausula Martens, por tanto, sirve como un paraguas ante situaciones controvertidas, manteniendo intacto el principio de humanidad que debe primar en los conflictos armados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó la importancia de esta cláusula en el Caso Barrios Altos de 2001, considerándola una fuente material de Derecho Internacional Humanitario, y resaltando que *“nadie osaría hoy negar que las ‘leyes de humanidad’ y las ‘exigencias de la conciencia pública’”* pertenecen al dominio del **jus cogens**¹⁴. Por todo lo expuesto, su carácter obligatorio para los estados es indiscutible.

¹⁴ Tocino María I., “La importancia de la cláusula martens en la regulación del uso de drones durante conflictos armados”, en Beloff Mary(dir.), Revista de Lecciones y Ensayos, nro 101, Buenos Aires, Facultad De Derecho De La Universidad De Buenos Aires (Consejo de Redacción), 2018, p 175-203.

3. Análisis de la legalidad de los drones en conflictos armados desde los principios del DIH

Teniendo en cuenta lo analizado en el acápite anterior y conforme a lo establecido por la Cláusula Martens, al no estar regulado específicamente en el orden jurídico internacional el uso de los drones en conflictos armados, surge la interrogante sobre la viabilidad de su utilización a la luz de los principios fundamentales del DIH, tal como lo refleja la Resolución 68/178 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Comenzando con el principio de discriminación o distinción, es imperativo distinguir siempre entre combatientes y civiles, así como entre objetivos militares y civiles, prohibiendo los ataques indiscriminados de conformidad con el artículo 51 del Protocolo Adicional I. Evaluar el cumplimiento de este principio requiere un juicio valorativo sobre la capacidad discriminatoria del operador del dron. Sin embargo, el problema surge cuando el dron es controlado por una inteligencia artificial (IA), entrenada mediante patrones de conducta en situaciones hipotéticas, lo que plantea interrogantes sobre su capacidad para discernir entre combatientes y civiles, y entre objetivos militares y civiles. Otro desafío radica en determinar si el dron tiene la capacidad para distinguir cuando un combatiente se rinde, ya que esto altera su condición jurídica de combatiente a prisionero de guerra. Si bien la tecnología ha logrado avances impensados al día de hoy, el dron puede convertirse en un arma altamente letal.

En relación con los principios de proporcionalidad y necesidad militar, cabe realizar una precisión similar: se requiere que el daño causado por los ataques no exceda la ventaja militar específica y que haya una necesidad militar manifiesta para realizar dichos ataques. Aquí también se requiere un juicio valorativo subjetivo en el caso que el dron opere de manera independiente, ya que es fundamental que la IA sea entrenada para identificar una ventaja o necesidad militar.

Respecto al principio de humanidad, cuya finalidad es limitar los medios y métodos de guerra por razones humanitarias, es evidente que los drones, siendo armas letales puedan causar sufrimientos innecesarios en la parte beligerante.

Si el dron está controlado por un humano, el piloto y el controlador serán los responsables internacionalmente por el incumplimiento de los principios del DIH, calificado por algunos autores como crimen de guerra según el Estatuto de Roma (arts. 5 y 8).

Las ventajas de los drones son innegables: al carecer de tripulación, no generan bajas humanas al ser derribados, poseen una notable velocidad, pueden volar a baja altitud y camuflarse para recolectar información del enemigo sin ser detectados, y son menos costosos que las aeronaves. Sin embargo, las desventajas son significativas. Pueden ser entrenados por patrones o sesgos discriminatorios, clasistas o raciales, y suelen tener un margen de error considerable. Además, existe el riesgo del efecto “Play Station”, descrito por Phil Aston como la sensación de inmersión en un videojuego. También plantean desafíos políticos, como la asimetría, en el uso entre países tecnológicamente avanzados y menos avanzados, lo que podría resultar en bajas humanas desproporcionadas, según la visión de Robert Geiss, la cual comparto. Además, se deben considerar los potenciales abusos derivados de su utilización.

4. Conclusión

Habiendo analizado la utilización de los drones en el marco del Derecho Internacional Público, arribo a la conclusión de que si se encuentran controlados por personas humanas y cumplen con los postulados del DIH, serían asimilables a las aeronaves de conformidad con el art. 3 b del Convenio Sobre Aviación Civil. Sin embargo, debo expresar mi preocupación sobre los peligros que conlleva la utilización de los drones como armas, amparados en su efectividad y disminución de costos. Estos dispositivos, son sumamente letales y su empleo puede infundir pánico y miedo en la población civil.

En el caso de los drones programados y entrenados para operar de manera independiente, es difícil considerarlos legales a la luz de la normativa actual, ya que no podrían cumplir con los principios establecidos por el DIH y la Clausula Martens.

Quiero concluir este artículo de investigación con una reflexión importante: la tecnología fue creada para servir al hombre, no para destruirlo. En una sociedad internacional que avanza hacia la resolución pacífica de las controversias, la inclusión de un arma tan letal como los drones representaría un retroceso significativo. ***Es evidente que la opción más efectiva o menos costosa no es siempre la mejor elección.***

**EL DARIÉN:
SOULS THAT LUNG, FEET THAN BLEED**

Enrique Ernesto Fernández Puentes

Abstract

During the course on Migrants and Protection of the Refugees imparted by the UBA (University of Buenos Aires), I attended a talk called “The role of civil society in immigration processes” dictated by Julio Croci (lawyer graduated from the UBA) who currently works for the International Organization for Migration (IOM). In this talk, the speaker mentioned a specific ongoing crisis that takes place in Panama, he briefly described the situation at the south boarder of this country, and he spoke about the illegal migrant's route of “El Darién”. In this academic paper we will analyze in detail the immigration crisis in the Panama – Colombia boarder, the causes of it and the dangerous journey that migrants endeavor to achieve the “American Dream”. We will analyze the legal basis of migrants and refugees international law, describing the key international legal instruments and international organisms that guard for their rights.

Key Words

International Humanitarian Law – Immigration Law – Latin America – Panama

Resumen

Durante la diplomatura sobre Migrantes y Protección de los Refugiados impartido por la UBA (Universidad de Buenos Aires), asistí a una charla llamada “El papel de la sociedad

civil en los procesos migratorios” dictada por Julio Croci (abogado egresado de la UBA) quien actualmente trabaja para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En esta charla, el expositor mencionó una crisis específica que se vive en Panamá, describió brevemente la situación en la frontera sur de este país y habló sobre la ruta de inmigrantes ilegales de “El Darién”. En este trabajo académico analizaremos en detalle la crisis migratoria en la frontera Panamá – Colombia, las causas de la misma y el peligroso viaje que emprenden los migrantes para alcanzar el “Sueño Americano”. Analizaremos la base jurídica del derecho internacional de migrantes y refugiados, describiendo los instrumentos jurídicos internacionales clave y los organismos internacionales que velan por sus derechos.

Palabras Clave

Derecho Internacional Humanitario – Derecho Migratorio –
América Latina – Panamá

1. Introduction

The region of “El Darién” (a province of Panama) is the largest natural reserve in Central America, it is considered one of the most biodiverse places in the planet. This impenetrable jungle of 575 thousand hectares, is in the Panama – Colombia boarder. UNESCO declared it an Environmental Heritage of Humanity in 1981 and included the area within Colombian territory under protection. This massive jungle occupies 13% of the territory of Panama. In Darién, there are more than 900 species of birds (the largest collection of bird species in the world), 2,163 species of flora, 160 species of mammals, 50 species of amphibians, forest, beaches, plateaus and virgin jungle¹⁵. But this natural gem is also the only way for migrants from all around the world to achieve the “American dream”.

However, this thick and massive jungle is the only place where the Pan-American highway (a route that travels from Ushuaia to Canada with no interruptions) is interrupted, this route is 17.848 km long (only 108 km are missing in this region). The last few years El Tapón del Darién has been a popular passage for irregular immigrants of diverse nationalities,

¹⁵ Millan Valencia, Alejandro “The hell of crossing the Dairen Gap” BBC January 31, 2018.

from close nations like Venezuela, Haiti, Ecuador, Chile, Brazil and Cuba, to places far away such as China, India, Afghanistan, Cameroon, Somalia, Africa and Asia.

In the last two years, Panama has been facing an unprecedented immigration crisis, with nearly 400,000 people making this hazardous journey through the jungle. In 2022, a total of 248,000 people entered the country irregularly through El Darien. Between the 01 and the 31 of August 2023 a total of 81.946 migrants were registered crossing irregularly through El Darién, assuming an average of 2.643 migrants daily¹⁶. In 2023 the total of migrants crossing El Darién exceeded the figure of 2022 by around 50,000 thousand (around 3,000 per day). This massive migratory flow has polluted and damage the jungle.

At the end Crossing this thick jungle is the only way for many migrants to reach Panama, then Mexico and many kilometers latter their final destination, the United States or Canada. The adversities that this jungle presents to humans attempting to cross it are several, from criminal groups dedicated to human or drugs trafficking, to jaguars and snakes. Interpol together with the Colombian National Police published a report in which they indicated that the migrants smuggling business through El Darién billed close to a million dollars weekly.



In green the region El Darién is pointed out, on the Colombia – Panama boarder.

¹⁶ International Organization for Migration (IOM), Jan 22 2024. DTM Panamá — Monitoreo de Flujo de Población Migrante — Darién y Chiriquí (Agosto 2023). IOM, Panama.

When inside the jungle it is impossible to distinguish the north from the south because one cannot see where the sun rises and where it hides because of the abundant vegetation; without a local guide or a GPS it's impossible to find your way through (some people get lost and wonder for days with an uncertain faith, like a dog chasing for his tail). The regular climate of this regions is hot, rainy and wet. The “roads” to cross the jungle are full of rises and descents with deep mud and multiple dangerous rivers to cross, in this journey a broken or twist uncle can lead to death.

2. Different roads to cross “El Darien”

All the roads to El Darien start in a coast town located in the north of Colombia called Necoclí. Most migrants take a bus from Medellin to get there (it takes 7 hs to travel that distance in car). Around 1.000 migrants per day arrive at Necocli, once there, they need to cross the Golf of El Darien by katamarán to Capurgana or Sapzurro towns located a few hours distance in the other side of the coast.

Each single ticket of the katamarán cost 40 dollars (many migrants travel in families with one or two children). Most of the migrants usually stay a period of around three months in the coasts of Necocli, there they try to sell food or goods to buy the katamarán ticket to Capurgana.

There are two main roads to cross el Darién. The most expensive one involves a boat and three days walk through the jungle. The other one is cheaper but consists of seven days walk, is far more dangerous. After crossing the jungle, the immigrants arrive to the city of Canáan Membrillo. Once there they must take another 6 hours boat and then a bus to arrive the ETRM¹⁷ (Station of Immigrant Reception or Migrant Reception Center) of San Vicente, Panama where the immigrants are received and wait for their administrative situation to be resolved. Initially there were four ETRM, but two of them were closed due to the bad conditions in which the people were living there and nowadays there are only two of them active: the one previously mentioned in San Vicente and another one in Bajo Chico that is located halfway to the east coast.

¹⁷ International Organization for Migration (IOM), Apr 23 2021. DTM Panama- Emergency monitoring: Immigration Reception Stations- COVID 19 Pandemic, statistical compilation September 2020 -February 2021. IOM, Panama.

3. Legal frame

The instruments of excellence on migrants and refugees in international law are The 1951 Geneva refugee Convention supplemented by its 1967 Protocol, they define the concept of refugee (Art.1) and outline their rights and the international standards of treatment for their protection. They are the key stone documents that form the basis of UNHCR (The UN Refugee Agency), this arm of the UN is charged with the task of supervising international conventions providing for the protection of refugees.

The Geneva Convention of 1951¹⁸ is crucial because it consolidates previous international instruments related to refugees and provides de most comprehensive codification of the rights of refugees at the international level. The core principle of the 1951 Convention is non-refoulement (Art. 33.1), which asserts that a refugee should not be returned to a country where they face serious threats to their life or freedom. The principle of non-refoulement is so fundamental that no reservations or derogations may be made to it.

It provides that no one shall expel or return (“refouler”) a refugee against his or her will, in any manner what so ever, to a territory where he or she fears threats to life or freedom. The Convention also states the exception to this principle in the Art. 33.2. The other two core principles in the Convention are non-discrimination (the convention provisions are to be applied without discrimination) and non-penalization (refugees should not be penalized for their irregular-illegal entry or stay).

The key elements here are: well-founded fear and persecution, but the convention does not establish a definition of persecution neither enunciates exhaustively which acts represent persecution for the person trying to be determine as a refuge. The person trying to be considered as a refugee needs to prove a well-founded fear of being persecuted in their country or origin, this prove has two elements one subjective and another objective (prove that the alleged circumstances exist in the country or origin). It is not necessary for the individual to prove that he was a victim of this acts of persecution, but the existence of this acts. Is enough to prove that these acts of persecution, despite that they haven’t occur yet, they will certainly happen soon.

The UNHCR determines which acts do not constitute persecution: different form of discrimination or a general environment of insecurity in the country of origin. The Article 31

¹⁸ Text of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees.

of the Convention determines that no sanction will be imposed to immigrants for illegal entry to the territory of any contracting state.

The Protocol¹⁹ of 1967 essentially removes the geographic and time-based limitations of the Conventions, because it was initially limited to protect only European refugees in the post second world war context.

The Convention enunciates as well, that its dispositions will not apply to any person from which well-founded reasons exist to consider that had committed a crime against peace, a war crime or a crime against humanity.

The right to asylum is protected by international human rights law by the following instruments: The Art. 27 of the American Declaration of the Rights and Duties of Man 1948 and the American Convention of Human Rights of 1969, Art. 22(7). Similar provisions are found in the Art. 14 of the Universal Declaration of Human Rights, the Art. 12 of the African Charter on Human and People`s Rights, and in the Art.18 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Many states have incorporated the right to seek and receive asylum to their constitutions (Bolivia, Brazil, Paraguay), for example Argentina incorporated The American Convention of Human Rights to the Art. 75.22. Despite the international protection of this right, each state has the autonomy to create their own legislation for refugees and national asylum systems.

All the states of the Latham region have their own procedure to determine de status of refugee, except Guyana y Suriname. In the 60s, 70s and 80s, the determination of refuge condition was done by the UNHCR under the mandate of each state. In most states, this procedure is carried out by collegiate administrative bodies integrated by representatives of members from different areas of the state (in some cases by members of the civil society). Most of them are bodies from the area of the Ministry of Interior, Ministry of Justice or Ministry of Foreign Affairs. This bodies resolve on the asylum request, the status, exclusion, cessation, cancelation or recission of the refugee condition. This bodies are called national commissions, and they have technical secretaries with a specialized profile, which instruct the files and carry on the refugee determination procedure. They include UNHCR in the procedure, with voice but no vote.

¹⁹ Text of the 1967 Protocol Related to the Status of Refugees.

4. Panama

Panama adhered to the 1951 Convention and the 1967 Protocol on the Status of Refugees in 1978. The definition of refugees in Panamanian law is like that of the 1951 Convention. Panama went further to include persecution on the grounds of gender, gender violence, domestic and family violence, female genital mutilation, punishments for not obeying moral values and customs, as well as discrimination against lesbians, gay, bisexual, trans, and intersex persons (LGBTIQ+) as forms that could justify the recognition of the refugee status in Panama.

In Panama, refugee status decisions are taken by the National Commission for the Protection of Refugees (CONARE in its Spanish acronym), composed of various institutions of the Panamanian State. Asylum applications are filed with the National Office for the Attention of Refugees (ONPAR in its Spanish acronym) in Panama City alone. Once registered, the claimant receives an asylum-seeker certificate, with the photograph of the claimant and a QR code. ONPAR schedules and conducts eligibility interviews with the claimants and accompanying family members individually.

Afterward, the files are evaluated by ONPAR officials, during which ONPAR may request further follow-up through additional interviews, to clarify any point or information. ONPAR then determines if the application is admitted into the procedure or inadmissible. If the application is admitted, the National Migration Service (SNM) grants the asylum seeker and accompanying family members provisional identification documents for six months, renewable.

Admitted cases are then evaluated by CONARE, which decides whether to grant refugee status. If the person is recognized as a refugee, the SNM grants them a document valid for one year, which allows them to process a work permit valid for the same period.

If the application is declared inadmissible by the ONPAR, or otherwise rejected, the applicant can file a reconsideration addressed to ONPAR, within five business days following notification of the resolution. Also, political leaders of opposition parties, including elected officials, and social leaders express their often-critical opinions of the government. Some individuals belonging to specific social groups such as human rights defenders, social activists, community representatives, and journalists who publish or speak out against a government institution, are also included. In countries in the North of Central

America, rural community members, including, those identified as opponents of the government as well as LGBTI persons, are some of the profiles.

The last decade the Panamanian government has made many attempts to control and reduce the migration crisis like, “the controlled flow” policy in 2015 and Operation Shield to combat criminal groups and migrant smuggling in the Darién. But the reality is that the number of migrants continued going up in 2023.

5. Conclusion

Migration through el Darién is unlikely to end. Closing irregular immigration pathways only forces migrants to find new ones (this is risky and more expensive for them) and it does not produce a decrease in the migration flows.

It is imperative to approach these conflicted and complex situations considering the diverse elements of it, meaning the environmental aspect and respecting the native populations that live peacefully in the jungle.

Latin-America is well known for being a beacon in the field of human rights, but like everything in life, balance is key. A deficiency on control in the borders is evident, as well as the lack of commitment and coordination among nations to solve this problem.

Last but not least, the construction of the missing part of the Pan-American highway is urgent, not only to provide a safer path for migrants but also because it would improve the local economies and reduce the criminal rate of the region.

SECCIÓN
VISIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL

A PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E O DIREITO À ALIMENTAÇÃO: UMA ANÁLISE DE DIREITO COMPARADO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA ARGENTINA

Lais Helena Pacheco Silva

Resumo

Esta investigação realiza a discussão sobre a inclusão da proteção da criança e do adolescente em meio ao sistema normativo da República Argentina e da República Federativa do Brasil, a partir da retomada histórica do contexto de proteção da infância. Aqui procura-se entender o processo de normatização da pauta protetiva e sua vinculação com a salvaguarda do direito à alimentação em âmbito interno. A partir da compreensão o Estado como um os agentes garantidores de direitos, têm-se em questão: como o direito à alimentação está atrelado à proteção da infância? Como cada ordenamento jurídico internalizou tal temática? Tais indagações traduzem-se numa investigação sociológica em duas dimensões: direitos das crianças e adolescentes e defesa do direito à alimentação. Tratou-se de considerar as peculiaridades históricas, considerando a inserção da temática na legislação interna, vislumbrando-se uma explícita menção ao direito à alimentação em matéria de infância no Brasil, enquanto uma implicitude da temática na legislação Argentina.

Palavras Chave

Infância – Proteção - Direito à alimentação.

Protección de la infancia y derecho a la alimentación: un análisis de derecho comparado entre la República Federativa del Brasil y la República Argentina

Resumen

Esta investigación discute la inclusión de la protección de niños y adolescentes dentro del sistema normativo de la República Argentina y la República Federativa del Brasil, a partir de la retomada histórica del contexto de protección infantil. Aquí buscamos comprender el proceso de estandarización de la agenda protectora y su conexión con la salvaguardia interna del derecho a la alimentación. Desde la comprensión del Estado como agente garante de derechos surge la pregunta: ¿cómo se vincula el derecho a la alimentación con la protección de la niñez? ¿Cómo internalizó cada sistema jurídico este tema? Tales interrogantes se traducen en una investigación sociológica en dos dimensiones: los derechos de los niños y adolescentes y la defensa del derecho a la alimentación. Se trata de abordar las peculiaridades históricas, considerando la inclusión del tema en la legislación interna, previendo una mención explícita del derecho a la alimentación en materia de infancia en Brasil y, al mismo tiempo, procurar consideraciones introductorias del tema en la legislación argentina.

Palabras Clave

Infancia – Protección – Derecho a la alimentación.

1. Introdução

A proteção da infância surge em meio a ideia de uma bagagem de direitos designados aos indivíduos no período pós Segunda Guerra Mundial. A modificação do cenário de guerras contribuiu para a designação do que se tem hoje como direitos humanos. Isso porque, durante

a Primeira Guerra Mundial, vislumbrou-se um conflito de campos de batalha, contudo, durante a Segunda grande Guerra o conflito se expandiu e passou a atingir a população civil. A partir de então, passou-se a pensar acerca de direitos que protegessem de forma abrangente a todos os indivíduos. Dentre esses indivíduos encontram-se uma parcela que, mesmo dotada de direitos, carece de proteção, diante de sua vulnerabilidade. Essa parcela da população são as crianças, e mais tarde, os adolescentes, que passaram a ser vistos como sujeitos alvo de proteção integral do Estado, da família e da sociedade.

Ocorre que, por um longo período após o surgimento da teorização de direitos humanos, as crianças e adolescentes eram alvo de proteção somente da família, estando as mazelas da sociedade. A participação do Estado passou a ser almejada com a marginalização da infância e da pobreza pela elite dos sujeitos de direito internacional com maior território continental, quer seja Argentina e Brasil.

Durante décadas, a temática da infância esteve a margem da política estatal de ambos Estados. Somente com o a promulgação do Patronato de Menores, lei nº 10.903 em 1919, pela Argentina, e o Código de Menores, Decreto nº 5.083, em 1926, é que o poder estatal passou a dar-se conta da existência dessa parcela da população.

De certo que a intervenção estatal em ambos os países somente emergiu diante de uma elite que estigmatizou a pobreza e a infância, todavia, foram fundamentais para o que se tem hoje como proteção no bojo da infância. Ademais, emergiu-se das profundezas a ideia de sujeito de direitos e de proteção por uma rede estatal e social.

Entre os direitos elencados a infância, está o direito de gozar do melhor padrão de vida possível, assegurando ao Estado o dever de garantir a aplicação de tal direito, devendo adotar medidas de combate a doenças e desnutrição, por meio de alimentos nutritivos, conforme dispõe o artigo 24.2 da Convenção sobre Direitos das Crianças²⁰. O direito basilar a alimentação passa a ter respaldo internacional no bojo da infância e juventude.

Em verdade, a ramificação do direito a vida e a dignidade está na garantia do direito à alimentação, tanto pelo Estado, como agente primário, quanto pela sociedade. Ao analisar o contexto histórico da normativa de proteção à infância, nota-se que a pobreza foi fato fundante para a atuação estatal. Nesse sentido, como mecanismo de inibição da

²⁰ UNICEF. Convenção sobre os Direitos das Crianças de 20 de novembro de 1989. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca>. Acesso em: 20/10/2023

vulnerabilidade de tais indivíduos, a salvaguarda do direito a alimentação passa a estar vinculada diretamente com os direitos primários das crianças e adolescentes.

Desse modo, o presente trabalho almeja analisar o contexto social da normatização do direito em se tratando de infância e juventude, a partir da retomada histórica da política de proteção emergente no Estado Argentino e Brasileiro. Ademais, pretende-se compreender a inserção da legislação internacional no bojo da infância em âmbito interno em ambos os Estados, em conjugação com a salvaguarda ao direito à alimentação como fator basilar para a mitigação da vulnerabilidade.

Em um primeiro momento será abordado a conjuntura internacional de proteção da infância e juventude, por meio da retomada histórica. Em seguimento, será investigado o enquadramento do direito no que tange a infância no ordenamento jurídico interno da República Argentina e da República Federativa do Brasil em consonância com o direito a alimentação. Ao final busca-se compreender como se deu a inserção da proteção da infância, a partir da salvaguarda do direito à alimentação na seara interna.

2. A proteção de direitos da infância no contexto internacional.

O bojo normativo referente a infância passou por diversas nuances ao longo de sua construção. Enquanto a ideia de direitos humanos desenvolveu-se durante o século XVIII, o debate acerca da proteção da criança somente tornou-se pauta no século XIX, com as primeiras normativas referentes a temática desenvolvidas no continente europeu.

De certo que o século XX contribuiu exponencialmente para a ideia de proteção dos infantes. Isso porque, a industrialização concorreu para a manutenção da exploração de mão de obra infantil em condições de insalubridade e insegurança. Nesse momento, percebeu-se a necessidade de mecanismos de proteção a à dignidade da criança.

Em um primeiro momento, após a criação da Liga das Nações, surge no período posterior a Primeira Guerra Mundial, a Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança, elaborada por Eglantyne Jebb, em 26 de setembro de 1924 (UNICEF)²¹. O texto normativo sucinto, composto por um preâmbulo e cinco artigos, enumerou direitos fundamentais e deveres resultantes da proteção dos direitos da criança, in verbis:

²¹ UNICEF. História dos direitos da criança. UNICEF. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/historia-dos-direitos-da-crianca>. Acesso: 23/09/2023.

Por esta Declaração dos Direitos da Criança, conhecida como Declaração de Genebra, homens e mulheres de todas as nações reconhecem que a humanidade deve dar à criança o melhor que tem, afirmando os seus deveres, independentemente de qualquer consideração de raça, nacionalidade ou crença. " (Preâmbulo).

Após as atrocidades advindas da Segunda Guerra Mundial e a criação da Organização das Nações Unidas (ONU) no ano de 1945, as necessidades emergências das crianças no período pós-guerra tornaram-se foco da Organização. Assim, em 1946 foi criado o Fundo das Nações Unidas para a Infância ,UNICEF, tornando-se permanente em 1953 (UNICEF)²².

Em consonância com a compreensão de direitos mínimos para a promoção da dignidade humana, a adoção da Declaração Universal de Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 1948, elevou o rol de proteção para um patamar de universalidade. Contudo, a temática da infância foi abarcada somente pelo parágrafo 2º, do artigo 25, na qual “a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social”.

Logo, em 20 de novembro de 1959, foi adotada pela ONU a Declaração dos Direitos da Criança, estabelecendo dez princípios direcionados a proteção dos direitos fundamentais e a manutenção de uma infância adequada. Dentre os princípios está o direito a alimentação, moradia e assistência médica adequadas para a criação da criança e da mãe. Nesse ponto, percebe-se que o mencionado texto se atentou a imprescindibilidade da salvaguarda do direito a alimentação para a manutenção da dignidade da criança:

Princípio IV - A criança deve gozar dos benefícios da previdência social. Terá direito a crescer e desenvolver-se em boa saúde; para essa finalidade deverão ser proporcionados, tanto a ela, quanto à sua mãe, cuidados especiais, incluindo-se a alimentação pré e pós-natal. A criança terá direito a desfrutar de alimentação, moradia, lazer e serviços médicos adequados.

²² UNICEF. História dos direitos da criança. UNICEF. Acesso: 23/09/2023. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/historia-dos-direitos-da-crianca>.

A inclusão do direito a alimentação como fundante para a conservação da vida e o desenvolvimento da criança convalida a temática de proteção da infância e salvaguardar do mínimo existencial. O processo de reconhecimento de direitos no âmbito internacional implicou na globalização do processo de proteção da infância.

Em 1966, os Pactos Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, passaram a prever a sustentação de direitos iguais para todas as crianças. Outro importante tratado que trouxe à tona a temática da proteção aos direitos das crianças foi a Convenção Americana, conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor em 18 de julho de 1978, após a Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos em 22 de novembro de 1969, na cidade de San José, Costa Rica.

A Convenção Americana elencou como direitos da criança a proteção concedida pela família, pela sociedade e pelo Estado, intitulado a triplicidade de agentes em seu artigo 19. Cumpre destacar que, além de mencionar a proteção da infância, a Convenção tornou tal artigo impassível de suspensão, conforme predispõe o artigo 27.2²³:

Artigo 27 - Suspensão de garantias

2. A disposição precedente não autoriza a suspensão dos direitos determinados nos seguintes artigos: 3 (direito ao reconhecimento da personalidade jurídica), 4 (direito à vida), 5 (direito à integridade pessoal), 6 (proibição da escravidão e da servidão), 9 (princípio da legalidade e da retroatividade), 12 (liberdade de consciência e religião), 17 (proteção da família), 18 (direito ao nome), 19 (direitos da criança), 20 (direito à nacionalidade) e 23 (direitos políticos), nem das garantias indispensáveis para a proteção de tais direitos.

Diante da universalização da infância e juventude, em 1979, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o ano como Internacional da Criança, em razão dos 20 anos da Declaração dos Direitos das Crianças. Posteriormente, em 20 de novembro de 1989, foi adotada pelo órgão central da ONU a Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC),

²³ Organização dos Estados Americanos, Convenção Americana de Direitos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), 1969. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/pacto-san-jose-costa-rica.pdf>. Acesso em: 09/11/2023.

entrando em vigor em 02 de setembro de 1990 com a ratificação de 196 países, dentre eles a República Federativa do Brasil, em 24 de setembro de 1990, e a República Argentina, em 04 de dezembro de 1990.

A CDC tratou de abarcar o direito a alimentação como base para a proteção dos direitos da criança. Em seu artigo 24, parágrafo 2º, a Convenção impôs como dever dos Estados Partes o combate a doenças e a desnutrição com o fornecimento de alimentos nutritivos²⁴. O dever de agir elencando pelo documento impõe uma responsabilidade ativa dos Estados na garantia do mínimo existencial na infância.

Sob esse prisma, a CDC instituiu o conceito de melhor interesse da criança, elencando no artigo 3º. O dispositivo menciona o dever das instituições públicas ou privadas em dispor de devida atenção ao melhor interesse da criança, assegurando a proteção e o cuidado necessários para o bem-estar, levando em consideração os direitos e deveres dos responsáveis. Em verdade, o artigo 3º complementa:

Artigo 3

- 1. Todas as ações relativas à criança, sejam elas levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de assistência social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar primordialmente o melhor interesse da criança.*
- 2. Os Estados Partes comprometem-se a assegurar à criança a proteção e o cuidado que sejam necessários ao seu bem-estar, levando em consideração os direitos e deveres de seus pais, tutores legais ou outras pessoas legalmente responsáveis por ela e, com essa finalidade, tomarão todas as medidas legislativas e administrativas adequadas.*
- 3. Os Estados Partes devem garantir que as instituições, as instalações e os serviços destinados aos cuidados ou à proteção da criança estejam em conformidade com os padrões estabelecidos pelas autoridades competentes, especialmente no que diz*

²⁴ Os Estados Partes devem garantir a plena aplicação desse direito e, em especial, devem adotar as medidas apropriadas para: reduzir a mortalidade infantil; assegurar a prestação de assistência médica e cuidados de saúde necessários para todas as crianças, dando ênfase aos cuidados primários de saúde; combater as doenças e a desnutrição, inclusive no contexto dos cuidados primários de saúde mediante, inter alia, a aplicação de tecnologia prontamente disponível e o fornecimento de alimentos nutritivos e de água limpa de boa qualidade, tendo em vista os perigos e riscos da poluição ambiental;

*respeito à segurança e à saúde da criança, ao número e à adequação das equipes e à existência de supervisão adequada.*²⁵

Basicamente, o cenário internacional passou a compreender a criança como indivíduo dotado de direitos e deveres, e com necessidades especiais pela ausência de capacidade para o exercício destes. A cooperação internacional que culminou na ratificação da CDC reverbera o compromisso dos Estados em matéria de infância, cabendo elucidar como a temática refletiu-se na República Federativa do Brasil e na República Argentina.

3. Brasil e Argentina: a proteção da infância e o direito a alimentação

3.1. Contextualização dos direitos das crianças no Brasil

A temática da proteção da infância e da salvaguarda de direitos apresenta diversas nuances no cenário interno brasileiro. Isso porque, os antecedentes da ratificação da CDC pelo país são marcados pela promulgação do primeiro Código de Menores, em 1927. A norma surgiu por meio de um movimento internacional que teve início nos Estados Unidos, migrando para a Europa, no final do século XIX, e posteriormente, para a América Latina, no século XX (ZANELLA, LARA, 2015)²⁶.

O cenário que antecede o Código de Menores perpassa a seara criminal, na qual não eram considerados criminosos os menores e nove anos de idade, conforme o Decreto nº 847 de 1890. Essa criminalização de crianças apresenta como antecedentes o Código Criminal da República, de 1890, que determinava a penalização de crianças entre 09 e 14 anos, considerando a Teoria do Discernimento²⁷.

²⁵ UNICEF. Convenção sobre os Direitos das Crianças de 20 de novembro de 1989. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca>. Acesso em: 20/10/2023

²⁶ Zanella, Maria N. & Lara, Angela M. de (...) USP – Ano VI, n. 10, p. 105-128, 2015. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/ran/article/view/123947/120180>. Acesso em: 23/09/2023.

²⁷ Em 1830 surgiu o Código Criminal do Império que optou o critério psicológico, ou teoria do discernimento, com a finalidade de determinar imputabilidade penal. Segundo o qual, verificava se que era ele capaz de entender o ato ilícito, de determinar-se de acordo com o entendimento do que estava cometendo. Declarando em seu artigo 10, inciso I, que não era criminoso o menor de 14 (quatorze) anos.

Em 1921, a Lei nº 4.242 autorizou o Estado a organizar o serviço de assistência social e proteção da infância abandonada e delinquente. Somente em 1922, com a difusão da ideia de assistência e proteção da infância, a temática passou a ser discutida por meio de um viés voltado a manutenção de direitos (ZANELLA, LARA, 2015)²⁸.

A repercussão temática foi tamanha que em 1926, o Decreto nº 5.083 instituiu o Código de Menores, como normativa consolidada de assistência e proteção ao menor. O Decreto nº 17.943-A entrou em vigor em 1927, consolidando a base legal referente aos menores abandonados.

Nesse ponto, a normativa impunha como situação de abandono a privação de alimentos, gerando a suspensão do pátrio poder. Aqui vislumbra-se uma cautela do legislador ao instituir o acesso ao direito a alimentação como basilar para a manutenção da subsistência da criança, fixando a restrição parcial ou até mesmo total de alimentos pelos pais ou responsáveis como ato ensejador da suspensão dos direitos e deveres exercidos por estes.

Em 1941, foi instituído o Serviço de Assistência a Menores (SAM), primeiro órgão federal destinado a atender “menores abandonados” e “desvalidos” (MPPR). Contudo, em 1964, militares criaram o FUNABEM, Fundação Nacional do Bem-estar do Menor e a Política Nacional do Bem-estar do Menor (PNBEM), na qual a questão da infância passou a ser tratada como problema de segurança nacional. Ocorre que, tais programas foram intensamente criticados devido a violência interna e ineficácia na ressocialização de jovens, uma vez que utilizavam de normas disciplinares rígidas, com estilo militar (OLIVEIRA, 1988)²⁹.

Com a promulgação do 2º Código de Menores, Lei nº 6.697 de 1979, é que a doutrina da proteção integral passa a constar no ordenamento jurídico na infância. Entretanto, mesmo com certos avanços, o Código ainda apresentava o paradigma do menor em situação irregular

²⁸ Zanella, Maria N. & LARA, Angela M. de (...) USP – Ano VI, n. 10, p. 105-128, 2015. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/ran/article/view/123947/120180>. Acesso em: 23/09/2023

²⁹ Oliveira, Benedito Adalberto Boletta de. Uma visão crítica da política do menor. *Psicol. cienc. prof.*, Brasília, v. 8, n. 1, p. 7-9, 1988. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141498931988000100004&lng=pt&nrm=iso>. Acessado em 24/09/2023.

previsto no regramento anterior. No fundado Código, não houve qualquer menção a essência do direito a alimentação, somente no que diz respeito a ação de alimentos.

Fato é que o bojo normativo da Lei nº 6.697/1979 trouxe à tona a ideia de proteção aos interesses da criança. Em seu artigo 5º, consta a superioridade dos interesses do “menor” em razão de qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado. Ademais, a nova normativa persiste na utilização do termo “menor” para referir-se as crianças em situações de irregularidade, em caráter discriminatório, por se contrapor ao paradigma de direitos da infância (MARCOLINO, 2020)³⁰.

Somente com 1988, com a promulgação da Carta Magna, denominada vulgarmente e Constituição Cidadã, a temática da infância alcançou grandes avanços. Um deles foi o artigo 227, que introduziu a doutrina da proteção integral da infância ao texto constitucional, in verbis:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

O dispositivo passou a garantir as crianças e adolescentes direitos fundamentais, tais como o direito a alimentação. Nesse contexto, surge na seara interna a ideia de direito a infância vinculado ao direito ao alimento como mínimo existencial. Tal artigo representou um grande avanço na seara de proteção dos direitos das crianças, agora vistas como seres individualizados dotados de direitos e deveres e passíveis de proteção adequada.

A vinculação da responsabilidade direta da família, do Estado e da sociedade na garantia de alimentos necessários para a manutenção da vida, em especial na infância foi um grande marco. A redação do artigo refletiu, de maneira igualitária, a maneira como a temática

³⁰ Marcolino, Fabíola Vilela Chaves. 30 anos do ECA: um estudo sobre as principais modificações ocorridas na legislação infanto juvenil Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 26 fev 2020, 04:30. Disponível em: <https://conteudojuridico.com.br/consulta/artigos/54262/30-anos-do-eca-um-estudo-sobre-as-principais-modificacoes-ocorridas-na-legislao-infanto-juvenil>. Acesso em: 24/09/2023.

estava sendo tratada em âmbito internacional, deixando de lado as nuances do Código de Menores de 1979.

Em consonância com as transformações e avanços na proteção dos direitos da infância, a República Federativa do Brasil ratificou a Convenção sobre Direitos da Criança (CDC), em 24 de setembro de 1990. Nesse momento, a ideia de estabelecimento de padrões mínimos para proteger os direitos das crianças passou a ser internalizado pelo país.

Diante da sinuosidade da pauta referente a infância, foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), entrando em vigor em 12 de outubro de 1990, dias após a ratificação da CDC. O texto normativo introduziu grandes modificações no que se entendia por direito da infância, acrescentando o adolescente no mesmo rol de proteção.

Em seu artigo 2º o Estatuto estabeleceu a diferença entre criança e adolescente. O termo criança passou a identificar os indivíduos com idade até 12 anos incompletos, enquanto que adolescente é aquele entre 12 e 18 anos incompletos. O termo “menor” caiu em desuso, devido ao reconhecimento da criança e do adolescente enquanto sujeito de direitos, evitando coloca-los em uma posição de inferioridade (MARCOLINO, 2020)³¹.

As crianças e adolescentes passaram a ser entendidos como seres humanos em fase de desenvolvimento, concernente a um maior cuidado na efetivação de seus direitos (MARCOLINO, 2020)³². Uma das características mais marcantes do Estatuto é a adoção da Doutrina da Proteção Integral, expressa no artigo 1º, reafirmado pelo artigo 3º com as modificações da Lei nº 13.257 de 2016, quer seja:

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades,

³¹ Marcolino, Fabíola Vilela Chaves. 30 anos do ECA: um estudo sobre as principais modificações ocorridas na legislação infanto juvenil Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 26 fev 2020, 04:30. Disponível em: <https://conteudojuridico.com.br/consulta/artigos/54262/30-anos-do-eca-um-estudo-sobre-as-principais-modificaes-ocorridas-na-legislao-infanto-juvenil>. Acesso em: 24/09/2023.

³² Marcolino, Fabíola Vilela Chaves. 30 anos do ECA: um estudo sobre as principais modificações ocorridas na legislação infanto juvenil Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 26 fev 2020, 04:30. Disponível em: <https://conteudojuridico.com.br/consulta/artigos/54262/30-anos-do-eca-um-estudo-sobre-as-principais-modificaes-ocorridas-na-legislao-infanto-juvenil>. Acesso em: 24/09/2023.

a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

O conteúdo do dispositivo salienta a igualdade no tratamento das crianças e adolescentes, o que difere em muito do 2º Código de Menores. O documento almejou tratar a infância e sua universalidade, atribuindo o tratamento igualitário previsto no artigo 5º do ECA, na Constituição Federal de 1988 quanto na Declaração Universal de Direitos Humanos e Convenção sobre Direitos das Crianças.

Novamente, o dever da família, do Estado e da sociedade na manutenção dos direitos da infância é reafirmado pelo artigo 4º do documento. A inovação trazida pelo dispositivo diz respeito ao termo “absoluta prioridade” na recepção de proteção e socorro, no atendimento de serviços públicos, na formulação de políticas sociais e na destinação de recursos públicos:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

- a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;*
- b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;*
- c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;*
- d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.*

Nota-se que, além de abordar a pauta da infância e juventude como primaz na formulação de políticas governamentais, o artigo 4º aduz a premência do direito a alimentação. O legislador preocupou-se em registrar a relevância do direito basilar ao alimento, positivado constitucionalmente no ordenamento brasileiro em consonância com o artigo 12 do Protocolo San Salvador, Adicional ao Pacto de San José da Costa Rica³³.

Com a temática em voga na seara internacional e após as modificações internas alcançadas pelo ECA, em 20 de maio de 1992 o presidente da República do Brasil e mais 25 governadores participaram da I Reunião de Cúpula de Governadores pela Criança, organizada pela UNICEF e parceiros. Na reunião foi firmado o Pacto pela Infância, nomeado como “500 dias de ação pela criança no Brasil”³⁴, almejando maior participação de entidades da sociedade civil e governantes para a pauta.

Em 2004, devido a novos contextos e preocupações acerca da atualização dos tratados que jaziam acerca da infância, foi ratificado pelo Brasil o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança. O documento abordou a venda de crianças, a prostituição infantil e a pornografia infantil. Um segundo texto abarcou o envolvimento de crianças em conflitos armados (LUNETAS, 2022)

Ocorre que, mesmo após a ratificação dos Protocolos Adicionais, a conjuntura internacional em constante mudança exigiu que a Assembleia das Nações Unidas adotasse o documento “Transformando nosso mundo: a Agenda 2030”. Nesse momento questões como fome, pobreza e proteção de crianças e adolescentes uniram-se a questões ambientais formando os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Os países membro da ONU compreenderam que para uma mudança efetiva, seria necessária uma agenda em que ficassem claros os objetivos a serem alcançados até o ano de 2030. A despeito da temática da infância, os ODS são de suma importância para garantir os

³³ ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Organização dos Estados Americanos, Protocolo de São Salvador. Disponível em: <https://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/docs/protocolo-san-salvador-es.pdf>. Acesso em: 24 set. 2023.

³⁴ LUNETAS. Como as crianças se tornaram prioridade absoluta em nosso país? LUNETAS

direitos e promover a cidadania, o acesso aos alimentos a erradicação da pobreza e a manutenção da dignidade.

Constata-se que a erradicação da pobreza e a fome zero, previstos nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são os primeiros objetivos a serem alcançados. A compreensão do acesso a alimentos como direito básico transpôs as barreiras territoriais, de modo a assegurar uma responsabilidade universal na promoção do acesso a alimentos nutricionalmente adequados a todos, em especial às crianças.

Retomando ao contexto interno, no ano de 2016 foi criada a Lei nº 13.257, o Marco Legal da Primeira Infância. O texto abarca o conhecimento científico sobre as crianças desde seu nascimento até os seis anos de idade, período fundamental para o desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, psicossociais e motoras. Basicamente compreende-se que a formulação de políticas públicas específicas para a primeira infância são de suma importância.

O artigo 5º, da Lei 13.257/2016 constitui como prioridade o desenvolvimento de políticas públicas para a primeira infância em se tratando de distribuição de alimentos e nutrição. A orientação acerca de alimentação complementar saudável a gestantes e familiares com crianças na primeira infância tornou-se um dever do Estado, previsto no parágrafo 3º do artigo 14³⁵.

Em consonância com o texto legal, em 2019 surgiu o Pacto Nacional pela Primeira Infância, assinado pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como organizações da sociedade civil. A participação do Estado e da sociedade na temática foi fundamental para repartir a responsabilidade ensejada no artigo 227 da Constituição Federal de 1988.

Não obstante, o Brasil possui uma história recente em matéria de proteção do direito à alimentação da criança e do adolescente. Contudo, os textos legislativos e a positivação dos

³⁵ Art. 14. As políticas e programas governamentais de apoio às famílias, incluindo as visitas domiciliares e os programas de promoção da paternidade e maternidade responsáveis, buscarão a articulação das áreas de saúde, nutrição, educação, assistência social, cultura, trabalho, habitação, meio ambiente e direitos humanos, entre outras, com vistas ao desenvolvimento integral da criança. § 3º As gestantes e as famílias com crianças na primeira infância deverão receber orientação e formação sobre maternidade e paternidade responsáveis, aleitamento materno, alimentação complementar saudável, crescimento e desenvolvimento infantil integral, prevenção de acidentes e educação sem uso de castigos

direitos na Carta Magna demonstram uma internalização da Convenção dos Direitos das Crianças.

3.2 Proteção da infância na Argentina

Ao analisar os antecedentes da criação do Estado Argentino, nota-se que as questões referentes a infância não foram priorizadas durante a formação e consolidação estatal. Em princípio a proteção da infância somente emergiu a partir de uma política sanitária e educativa, devido ao aumento de crianças abandonadas, culminando na criação da primeira Casa de Crianças Abandonadas, em 1779, até a criação da Sociedade Beneficente, em 1823 (BELOFF, 2005)³⁶. Entendeu-se, em um primeiro momento que proteção da infância deveria advir de um contexto privado, marcado pela atuação da sociedade civil.

Ocorre que, a partir do século XIX, após a guerra de independência, as questões referentes a infância começaram tornaram-se pauta de intervenção estatal. Isso porque, a máquina governamental passou a assegurar o funcionamento das casas de acolhimento, físicos, nos termos da Lei nº 13.010, de 26 de junho de 2014, com o intuito de favorecer a formação e a consolidação de vínculos afetivos e estimular o desenvolvimento integral na primeira infância, por meio da oferta dos subsídios necessários. Contudo, ainda não se falava de proteção de direitos, somente apoio estatal as ações realizadas por entes privados.

Essa omissão do Estado diante da temática sofreu transformações a partir do surgimento da pauta social como tema da agenda política nacional (BELOFF, 2005)³⁷. Após a superação dos conflitos hegemônicos internos, com o surgimento da “Argentina moderna”,

³⁶ Beloff, Mary. Constitución y derecho del niño. Editores del Puerto. 2005, Buenos Aires. Disponível em: https://campus.eco.unlpam.edu.ar/pluginfile.php/138200/mod_resource/content/1/Bellof_Mary_Constitucion_y_derechos_del_nino.pdf. Acesso em: 01 nov. 2023. In: Cf. MORENO, José Luis, La Casa de Niños Expósitos de Buenos Aires, conflictos institucionales, condiciones devida y mortalidad de los infantes 1779-1823, en MORENO, La política social antes de la política social (caridad, beneficencia y política social en Buenos Aires, siglos XVII a XX), cit., ps. 91-127. Conforme informa este autor, la Casa de Niños Expósitos fue inaugurada en agosto de 1782 con el dispositivo del torno, por iniciativa del Síndico Procurador General Marcos José DE RIGLOS. Siempre contó con escasos recursos para la numerosa cantidad de niños que desde un inicio fue alojada allí al punto de llegar a pensarse en vender como esclavos a los niños provenientes de grupos “sospechosos” de haberlos dejados allí para liberarlos, idea que fue rechazada por el monarca español. Acesso em: 29/09/2023.

³⁷ Beloff, Mary. Constitución y derecho del niño. Editores del Puerto. 2005, Buenos Aires. Disponível em: https://campus.eco.unlpam.edu.ar/pluginfile.php/138200/mod_resource/content/1/Bellof_Mary_Constitucion_y_derechos_del_nino.pdf. Acesso em: 01/11/2023.

a pauta social das crianças em situação de vulnerabilidade passou a ser debatida no contexto estatal.

Tão logo, em 1919, foi aprovada a lei nº 10.903, denominada Patronato de Menores, considerada a primeira lei da América Latina a consagrar a proteção de crianças carentes como pauta de política pública. Tal normativa nacional apresenta dispositivos processuais e organizacionais, que almejam regular a conjuntura dos menores diretamente envolvidos em delitos ou contravenções, quer seja como autores ou vítimas (BELOFF, 2005)³⁸.

Mesmo apresentando um caráter penal, a Lei nº 10.903/1919 foi vanguardista, ao trazer à tona a temática da infância abandonada, pobre e fragilizada, relacionando-as diretamente a delinquência (BATTISTINI, 2020)³⁹. Se instalou um discurso jurídico em torno do “menor” visibilizando a incapacidade familiar de controlar seus anseios. Não apenas, a legislação estava diretamente vinculada ao ingresso de imigrantes no país e a preocupação em definir mecanismos de controle para evitar a propagação de ideias anarquistas e socialistas (BATTISTINI, 2020)⁴⁰.

Já na primeira metade do século XX é marcada pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, enfrentamentos armados e desconhecimento da proteção do ser humano. Ao final da Segunda Guerra Mundial, com um saldo considerável de violações humanitárias, a comunidade internacional passou a trilhar um caminho rumo ao reconhecimento de direitos humanos expressos de caráter protetivo obrigatório.

Essa ideia de direitos fundamentais passou a ser positivada por meio da Declaração de Genebra sobre direitos de crianças e jovens, de 1924, a Declaração dos direitos das

³⁸ Beloff, Mary. Constitución y derecho del niño. Editores del Puerto. 2005, Buenos Aires. Disponível em: https://campus.eco.unlpam.edu.ar/pluginfile.php/138200/mod_resource/content/1/Bellof_Mary_Constitucion_y_derechos_del_nino.pdf. Acesso em: 01/11/2023.

³⁹ Battistini, María Cecilia. Legislación sobre infancias em Argentina. Uma mirada em el contexto histórico. Revista Argumentos, 2020, pp. 70-82. Disponível em: <https://revistaargumentos.justiciacordoba.gob.ar/index.php/primera/article/view/169/151>. Acesso em: 01/11/2023.

⁴⁰ Battistini, María Cecilia. Legislación sobre infancias em Argentina. Uma mirada em el contexto histórico. Revista Argumentos, 2020, pp. 70-82. Disponível em: <https://revistaargumentos.justiciacordoba.gob.ar/index.php/primera/article/view/169/151>. Acesso em: 01 nov. 2023. In: Laje, M. I. (2004). El contexto legal de las instituciones correccionales. Entre la defensa social y las garantías, en Adolescentes y jóvenes en instituciones de menores: Un análisis social de la intervención estatal. Tesis Doctoral, Buenos Aires: UBA. Acesso em: 01/11/2023.

crianças de 1959, e pela Convenção dos Direitos das Criança, sancionada em 1989 e sancionada pela Argentina, em 27 de setembro de 1990 e promulgada pela Lei 23.849 de 1990.

A partir de então, os direitos no tocante a infância passou a ser reconhecidos em caráter protetivo e não mais punitivo, como previsto pela Lei 10.903/19. Nesse momento, surge a imposição estatal de preservação e proteção da infância, reconhecendo às crianças e adolescentes direitos básicos como saúde, educação e alimentação, conforme artigos 24.2, “c”, e 27.3, da Lei 23.849/90. A partir de então, as cidades passaram a adotar leis em caráter protetivo, influídas pela Convenção dos Direitos das Crianças, de 1959.

Em consonância com a seara internacional, a República Argentina aprovou a Convenção sobre Direitos da Criança de Nova York e promulgou a lei 25043, em 1998. Tal documento reconheceu a importância do Comitê de Direitos da Criança e sua competência para fiscalizar e aplicar as normativas. Em 1994, foi aprovada pelo Estado a Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, promulgada por meio da Lei 25.179 de 1999.

Outros textos internacionais foram firmados pelo país, tais como o Protocolo Relativo à Venda de Crianças à Prostituição Infantil e ao Uso de Crianças na Pornografia de 2000, promulgado pela Lei 25.763 de 2003. Entretanto, tais documentos nada mencionam acerca da salvaguarda do direito à alimentação, tornando a Convenção de Direitos das Crianças o único dispositivo, até então, a assegurar a alimentação como direito básico.

Somente com a Lei 26.061 de 2005, a Lei Nacional de Proteção Integral dos Direitos das Crianças e Adolescentes, a Argentina passou a ter uma legislação própria que assegurasse os direitos a menor infância, em especial os direitos a vida, dignidade, privacidade, identidade, documentação, saúde, educação gratuita, não discriminação, liberdade, esporte e lazer, meio ambiente, dignidade, livre associação⁴¹.

Fato é que não há dispositivo normativo explícito com o fim de garantir o direito básico à alimentação. De certo que o direito ao alimento pode ser enquadrado como espécie

⁴¹ Congreso de la Nación Argentina. Ley 26061 de 21 de octubre de 2005. Disponível em: [https://e-legal-ar.msal.gov.ar/htdocs/legisalud/migration/html/6483.html](https://e-legal.ar.msal.gov.ar/htdocs/legisalud/migration/html/6483.html). Acesso em 01/11/2023.

do direito a dignidade e a vida, na qualidade de gênero. Entretanto, a inobservância de uma disposição específica para o resguardo do elemento basilar para a manutenção da subsistência ocasiona em uma ausência de políticas públicas voltadas para a manutenção de tal direito.

Ao final, após a reforma da Carta Magna Argentina, em 1994, o fomento a políticas públicas no que tange a proteção de crianças passou a estar previsto constitucionalmente, no artigo 22 e, especialmente, no artigo 23, da Carta Magna:

23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia⁴².

Contudo, ao analisar o texto constitucional, observa-se que nada consta a respeito do direito à alimentação. De fato, tal qual pressupõe-se que sem alimentação não há vida, observa-se que o documento aborda o dever do Estado ante a garantia de mecanismos de seguridade social, por meio a implementação de políticas públicas para o acesso de uma vida digna, conforme artigo 14.

Em conformidade com a norma basilar, diversas leis no tocante da infância foram promulgadas, entretanto, nenhuma acercou-se da temática alimentar, tais como o Decreto 415/2006, abordando a proteção integral dos direitos das crianças e adolescentes; a Lei nº 26.290 de 2007, acerca da capacitação de pessoal das diversas forças no bojo dos direitos humanos reconhecidos para meninas, meninos e adolescentes; a Lei nº 26.316 de 2007, que reconhece o Dia Nacional de Prevenção ao Abuso contra Crianças e Adolescentes no dia 19 de novembro de cada ano; e por fim, a Lei 26.390 de 2008, que altera as 20.744, 22.248,

⁴² Constitución Nacional Argentina. Disponível em: <http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/cuerpo1.php>. Acesso em: 01/11/2023.

23.551, 25.013 e Decreto Lei nº 326/56, trazendo à tona o trabalho de menores de dezoito (18) anos em todas as suas modalidades.

De fato, a pauta da proteção da infância passou por grandes transformações nacionais ao decorrer do século XX e XXI. Passou-se de uma ideia de “menor” como desprovido de recursos e imerso na delinquência para uma ideia de sujeito detentor de direitos e passível de proteção estatal. Não obstante, no que concerne ao direito à alimentação, propriamente dito, não há qualquer menção direta nos textos normativos nacionais, com exceção da Lei nº Lei 25.179 de 1999, que internaliza a Convenção de Direitos das Crianças, gerando questionamentos acerca da preocupação estatal com o fornecimento de subsídios básicos para a manutenção da vida e da infância.

4. Conclusão

Claramente, a inquietude da elite tanto brasileira quanto argentina em se tratando de delinquência infantil foi fator determinante para a intervenção estatal. Em verdade, até a promulgação do Patronato de Menores, em 1919, na Argentina, as crianças e adolescentes eram deixados a margem da sociedade pelo Estado, sujeitando-se a atuação privada. Não obstante, no Brasil tal conjuntura se replica, a partir da promulgação do Código de Menor, em 1927. A elite brasileira, diante da marginalização de crianças periféricas, passou a requerer do ente estatal uma atuação efetiva para a proteção do restante da sociedade. A idealização do jovem periférico, imerso na pobreza como delinquente a ser contido pela máquina governamental é fator de semelhança entre a política pública preconizada na Argentina e sequenciada pelo Brasil.

Somente após a compreensão do ser humano como indivíduo dotado de direitos e dignidade, e a ramificação desse conceito para a seara da infância é que as perspectivas normativas passaram da ideia de criminalização da pobreza para a proteção do sujeito de direitos. Nesse ponto, nota-se que após a Convenção dos Direitos das Crianças, ratificada por ambos os países, a infância passou a ser objeto de proteção não só da família, como do Estado e da sociedade. Direitos e deveres passaram a ser impostos às três instâncias em caráter mundial.

Mesmo diante da extensa carga legislativa no que se refere a infância, em ambos os Estados, no que diz respeito ao direito social à alimentação, há que se tecer alguns comentários. De certo que, em se tratando da República Federativa do Brasil, a imersão tardia no que diz respeito a pauta da infância e juventude transcorreu em um atraso normativo, e consequentemente, em um abandono às mazelas sociais.

Entretanto, há de se salientar que após a Constituição Federal de 1988, em especial, após a Emenda Constitucional de 2010, o direito à alimentação passou a ser vinculado aos direitos sociais, previstos no artigo 6º, do texto constitucional. Além de prever dispositivos específicos para a proteção de crianças, tal qual pressupõe o artigo 227, acrescentou-se explicitamente à Carta Magna o direito ao alimento.

Não obstante, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que entrou em vigor em 1990 passou a ser a norma infraconstitucional mais completa sobre a infância no território brasileiro. Ao reafirmar o dever do Estado, da família e da sociedade em promover os direitos e garantias, o ECA mencionou expressamente o direito constitucional à alimentação, em seu artigo 4º.

Em contrapartida, mesmo sendo pioneira no que tange a legislação acerca da infância, na República Argentina, os constituintes originários e reformadores deixaram de ditatar expressamente a pauta alimentar em seu texto constitucional. Consequentemente, a legislação infraconstitucional permaneceu em um lobby no que se refere a expressa consignação do mínimo existencial.

De certo que, após a promulgação da Lei nº 23.849 de 1990, que internalizou a Convenção dos Direitos das Crianças, a pauta alimentar adentrou ao ordenamento jurídico argentino, por meio do dispositivo previsto no artigo 27.3. Todavia, a implicitude do direito à alimentação na Carta Magna, ao considera-lo incluso dentro do dispositivo que aborda a seguridade social, quer seja o artigo 4º, demonstra a ausência de respaldo constitucional no que se refere à segurança alimentar.

Em verdade, a positivação do direito à alimentação, em especial no que diz respeito à infância, traz à tona uma preocupação do Estado em assegurar o mínimo existencial para a manutenção da vida de crianças e adolescentes. Ao contrapor a legislação de dois grandes Estados limítrofes, quer seja Argentina e Brasil, nota-se que, diante de contextos

socioeconômicos distintos, cada qual internalizou a ideia de proteção e salvaguarda da infância.

Certamente, explicitude do direito a alimentação corrobora com uma fundamentação constitucional de políticas públicas vinculadas a subsistência infanto-juvenil. De igual modo, denota-se, ao final, um avanço na temática legislativa protetiva, contudo, há de se vislumbrar as incongruências no contexto fático e a permanente mutabilidade da questão para que, só então, o ordenamento de ambos os Estados esteja em conformidade com um fim único, quer seja assegurar todas as crianças e adolescentes a proteção adequada e a segurança alimentar necessária para a manutenção da dignidade.

A EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO AMBIENTAL INTERNACIONAL E O CONTEXTO BRASILEIRO E ARGENTINO

Luis Enrique Dutra Mageste

Resumo

O presente artigo tem como objetivo analisar a evolução da proteção ambiental em nível internacional em meio às transformações sociais ocasionadas a partir do século XX, as quais acentuaram de maneira significativa a exploração do meio ambiente através dos recursos tecnológicos. Além disso, em meio às mudanças internacionais em torno da conservação ambiental, os países como Brasil e Argentina criaram legislações que regulamentam a proteção do meio ambiente, de forma a garantir o desenvolvimento sustentável para as presentes e futuras gerações. Ao final da pesquisa, verificou-se que a nível internacional há uma crescente movimentação para garantir ao mesmo tempo o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Ademais, em âmbito regional por meio do Pacto de São Salvador, houve a implementação do meio ambiente como direito humano. Por fim, nota-se o constante esforço de Brasil e Argentina para implementar ações que afirmam o direito ao meio ambiente como indispensável ao desenvolvimento humano, aliado às diretrizes internacionais e regionais de proteção.

Palavras-chave

meio ambiente - proteção ambiental - evolução internacional –
Brasil - Argentina.

LA EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL INTERNACIONAL Y EL CONTEXTO BRASILEÑO Y ARGENTINO

Resumen

Este artículo tiene como objetivo analizar la evolución de la protección ambiental a nivel internacional en medio de las transformaciones sociales provocadas a partir del siglo XX, que acentuaron significativamente la explotación del medio ambiente a través de recursos tecnológicos. Además, en medio de los cambios internacionales en torno a la conservación del medio ambiente, países como Brasil y Argentina han creado leyes que regulan la protección del medio ambiente, con el fin de garantizar el desarrollo sostenible para las generaciones presentes y futuras. Al final de la investigación fue hallado que, a nivel internacional, existe un movimiento creciente para garantizar el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente. Además, a nivel regional a través del Pacto de São Salvador, el medio ambiente se implementó como un derecho humano. Finalmente, destacamos el esfuerzo constante de Brasil y Argentina por implementar acciones que afirmen el derecho al medio ambiente como indispensable para el desarrollo humano, combinado con lineamientos internacionales y regionales de protección.

Palabras clave

Medio ambiente – Protección ambiental – evolución internacional –
Brasil – Argentina

1. Introdução

Com os avanços tecnológicos e a alteração nos meios de produtividade laboral, como a transformação da manufatura para maquinofatura, o meio ambiente se viu altamente impactado. Nos períodos posteriores à Revolução Industrial, houve um nível crescente de poluição e degradação com a exploração acentuada de recursos minerais e energéticos, potencializado pelo desenvolvimento tecnológico. Além disso, o conflito entre os países em

torno da questão ambiental se intensificou no século XX, em que os efeitos da degradação do meio ambiente não eram sentidos somente em território de um país, mas impactavam os Estados fronteiriços.

A partir desse momento, os países começaram a reunir-se para tratar da temática ambiental a nível internacional, como forma de garantir o desenvolvimento econômico aliado à conservação do meio ambiente. Com isso, conferências internacionais foram realizadas para que os países tivessem orientações de conservação e proteção ambiental. Ademais, tratados em âmbito de organizações internacionais regionais começaram a ser celebrados entre Estados para tornar a proteção ambiental uma necessidade básica e urgente.

Posteriormente a essa mudança da perspectiva internacional em relação ao meio ambiente, os Estados começaram a editar legislações que incorporam parte das diretrizes externas universais e regionais. As normas internas elaboradas pelos Estados, não só têm objetivo de garantir um desenvolvimento econômico sustentável, mas tratar da prevenção ambiental para que seja garantido o direito ao meio ambiente saudável para as presentes e futuras gerações.

Por isso, o presente trabalho tem como objetivo descrever em partes a evolução do direito ambiental a nível internacional, bem como descrever como a mudança nesse cenário mundial impactou as legislações internas dos Estados, especificamente Brasil e Argentina. Essa análise será realizada a partir das legislações de cada país, de artigos e livros doutrinários que abordam a transformação da questão ambiental.

2. A evolução da proteção ambiental internacional

Os avanços sociais trouxeram impactos significativos para o meio ambiente em escala mundial. Por volta do século XX, as relações humanas com o meio ambiente se transformaram de maneira perceptível, em razão da alteração da produção artesanal para substituição por máquinas após o advento da Revolução Industrial.

A partir desse momento, a evolução tecnológica permitiu que o homem alterasse profundamente o meio ambiente, através da exploração de recursos minerais e energéticos, trazendo como consequência o aumento da poluição e degradação. Em meio a nova tendência tecnológica que permitiu a exploração ambiental em um lapso temporal altamente reduzido,

viu-se a necessidade de traçar mecanismos para assegurar o direito ao meio ambiente equilibrado e seguro, como forma de proteção e manutenção da vida.

A nível internacional, um dos primeiros embates relacionados ao meio ambiente ocorreu entre Estados Unidos e Canadá em 1941. Em território canadense, fronteiro com os Estados Unidos, havia uma fábrica de fundição em pleno funcionamento. Porém, a emissão de gases poluentes era constante e massiva, a qual não se concentrava somente em território do Canadá, passando-se a espalhar para as cidades vizinhas dos Estados Unidos, como Washington.

O conflito foi levado ao Tribunal Arbitral para resolução da demanda. Em sentença proferida, foi entendido que Canadá era responsável pela emissão de gases poluentes em território dos Estados Unidos, devendo arcar com a multa em decorrência dos danos gerados. A fundamentação da decisão arbitral teve como base o Tratado de Águas Fronteiriças de 1909⁴³.

Posteriormente a esse momento de conflito entre os países, foi necessário começar a pensar a proteção ambiental através dos componentes necessários a manutenção do ambiente e da vida humana, tais quais os oceanos, mares, rios de água doce e rios freáticos, pântanos, áreas de conservação de espécies migratórias em âmbito internacional, dentre outros. Por isso, dentro dessa nova perspectiva de proteção, os Estados começaram a se juntar para tratar da dinâmica de utilização do meio ambiente a nível global.

No plano internacional, a primeira reunião efetivamente realizada para tratar das questões climáticas, gerou o denominado Relatório de Founex. Neste relatório foi abordada a temática de desenvolvimento tecnológico frente a preservação de recursos naturais, de maneira a gerar uma relação equilibrada e conciliadora na exploração ambiental, com desenvolvimento sustentável igualitário entre os países e redução das desigualdades regionais.

Posteriormente à publicação do relatório de Founex, foi realizada a primeira conferência para tratar da temática ambiental, a denominada Conferência de Estocolmo de 1972. A principal razão para que ocorresse em nível internacional as discussões acerca do

⁴³ RIAA (Reports of International Arbitral Awards), p. 1937 a 1982. In: MARTINS, Francisco Sales da Silva. A EVOLUÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL INTERNACIONAL E SUA ÍNTIMA RELAÇÃO COM OS FATOS HISTÓRICOS DE SUA FORMAÇÃO. Fortaleza: Centro Universitário 7 de Setembro, 4. Disponível em: <https://www.uni7.edu.br/ic2011/191.pdf>. Acesso em: 23/11/2023.

meio ambiente, era de que o cenário neste período gerava preocupação entre os Estados, visto que os níveis de poluição cresciam desenfreadamente, somado aos acidentes ambientais e as tragédias que começaram a ocorrer. Além disso, as denominadas “marés negras”, estavam cada vez mais presentes, em decorrência da grande concentração de óleo nos mares e rios de água doce, afetando drasticamente a fauna e a flora marinha.

A Conferência de Estocolmo contou com a participação de 113 países⁴⁴, além da presença de inúmeras organizações internacionais. Importante destacar que os países membros da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) não compareceram à Conferência.

Apesar dos diferentes interesses envolvidos, principalmente voltados aos países “desenvolvidos” e os países “em desenvolvimento”, a Conferência de Estocolmo produziu resultados significativos a nível internacional quanto à proteção ambiental. De início, criou-se uma orientação aos países acerca da exploração ambiental, mas não havia caráter vinculante e punitivo, pois era um marco inicial de discussão sobre o meio ambiente. Por isso, essa orientação foi chamada de soft law, o qual não é considerado um direito propriamente dito, de modo que não acarretava nenhuma punição se não houvesse o devido cumprimento.

Outro grande marco da Convenção de Estocolmo de 1972 foi a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, em âmbito das Nações Unidas. Embora não seja uma organização internacional, o PNUMA:

“Tem como objetivo coordenar as ações internacionais de proteção ao meio ambiente e de promoção do desenvolvimento sustentável. Para isso, trabalha com grande número de parceiros, incluindo outras entidades das ONU, organizações internacionais, organizações ligadas aos governos nacionais e organizações não governamentais.

⁴⁴ Cetesb. Conferência de Estocolmo. CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencias-internacionais-sobre-o-meio-ambiente/estocolmo/#:~:text=A%20Confer%C3%Aancia%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas,Estocolmo%20e%20reuniu%20113%20pa%C3%ADses>. Acesso em: 26/09/2023.

Principal autoridade global e um defensor autorizado do meio ambiente, o programa tem por objetivo promover a conservação do meio ambiente e o uso eficiente de recursos no contexto do desenvolvimento sustentável⁴⁵”.

Além disso, a Conferência de Estocolmo traçou princípios acerca da conservação do meio ambiente, como descarte correto de substâncias tóxicas, prevenção à poluição em mares, ambiente seguro para desenvolvimento e melhora da qualidade de vida, gestão racional dos recursos naturais, investimento em educação e pesquisa, dentre outros⁴⁶.

Dessa forma, observa-se que a Conferência de Estocolmo de 1972 representou um avanço para o meio ambiente internacional, de forma a tratar de desenvolvimento sustentável e preservação ambiental em conjunto. Essa Conferência incluiu o uso adequado dos recursos minerais e energéticos, ainda que nenhum acordo propriamente dito fosse realizado entre os países participantes.

Após as discussões e resultados da Conferência de Estocolmo de 1972, os novos conflitos internacionais, como a Guerra do Vietnã, e os acidentes ambientais continuaram frequentes ao redor do mundo, como o acidente na usina de Chernobyl. Sendo assim, houve a necessidade dos países se reunirem novamente para tratar com mais seriedade as questões ambientais. A partir daí, há a Rio-92.

A Rio-92 foi uma Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, sediada na cidade do Rio de Janeiro. Nesta Conferência a temática ambiental foi a pauta principal, tratando de como os fatores sociais e econômicos estão relacionados com o meio ambiente, de forma que são interdependentes e evoluem juntos para construção de um desenvolvimento sustentável ao redor do mundo.

A Rio-92 representou um passo importante na história da proteção ambiental internacional, pois traçou diretrizes e parâmetros de ação para os países, com intuito de orientar a cooperação internacional e criação de uma política de desenvolvimento no século XXI. Ademais, a Rio-92 abordou as questões relacionadas aos meios acelerados de produção

⁴⁵ Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Wikipédia. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Meio_Ambiente. Acesso em: 27/09/2023.

⁴⁶ Bezerra, Juliana. Conferência de Estocolmo. Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/conferencia-de-estocolmo/>. Acesso em: 24/09/2023.

e consumo da sociedade, como uma maneira de equilibrar os aspectos sociais, econômicos e ambientais, o que representou um grande avanço à época da realização da conferência.

Dentre os resultados da Rio-92, foram estipulados 27 princípios que pautam o desenvolvimento sustentável dos países, os quais pode-se destacar o desenvolvimento sustentável, o uso ambiental de maneira racional e equilibrada atendendo as gerações presentes e futuras, a proteção do meio ambiente como parte integrante do processo desenvolvimento dos países, ações para que os países restabeleçam a saúde e a integridade dos ecossistemas afetados, dentre outros⁴⁷.

Outra resultante da Rio-92, foi a elaboração da Agenda 21. Este documento traçou ações não só para os países a respeito da proteção ambiental, mas também as empresas e as ONGs, de forma a envolver todos os setores sociais em torno das questões ambientais, a nível global e regional. Um dos principais aspectos da Agenda 21 é o conceito de planejamento, unindo o progresso econômico com a proteção ambiental e a construção de ações participativas globais que estimulem o desenvolvimento sustentável e a difusão da cultura do não desperdício⁴⁸.

Como forma de garantir e efetivar as disposições contidas na Agenda 21, a Rio- 92 criou a Comissão de Desenvolvimento Sustentável. Essa Comissão tem como objetivo:

“analisar os progressos na implementação da Agenda 21 e da Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento; bem como fornecer orientação política para acompanhar o Plano de Implementação de Joanesburgo (JPOI) a nível local, nacional, regional e internacional. O JPOI reafirmou que a CSD é o fórum de alto nível para o desenvolvimento sustentável dentro do sistema das Nações Unidas⁴⁹”.

⁴⁷ ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, Brasil, 3 a 14 de junio de 1992. Organização das Nações Unidas , ONU. Conferencias | Medio ambiente y desarrollo sostenible. Disponível em: <https://www.un.org/es/conferences/environment/rio1992>. Acesso em: 29/09/2023.

⁴⁸ Agenda 21. Wikipedia. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Agenda_21. Acesso em: 30/09/2023.

⁴⁹ ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Sobre a Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (CSD). Organização das Nações Unidas, ONU, Division for Sustainable Development. Disponível em:

https://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_aboucsd.shtml?utm_source=OldRedirect&utm_medium=redirect&utm_content=dsd&utm_campaign=OldRedirect. Acesso em: 02/10/2023.

Logo, verifica-se que a Rio-92 inovou em torno da temática ambiental, representando um marco de desenvolvimento sustentável global e regional.

Por fim, em se tratando de Conferências realizadas para discutir a temática ambiental, em 2002 aconteceu a Conferência de Joanesburgo, com a proposta de reavaliar e implementar as ações trazidas pela Rio-92. A Conferência tratou da temática relacionada ao avanço da pobreza e das desigualdades sociais em toda parte do mundo, buscando estratégias para alcançar o desenvolvimento sustentável.

Embora as Conferências descritas representaram um avanço significativo para a proteção do meio ambiente a nível global e regional, os países começaram a se unir através de tratados para pautar a questão ambiental. A exemplo, os Estados parte da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto São José da Costa Rica, através do Protocolo de San Salvador - Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, instituíram no artigo 11, o direito ao meio ambiente saudável.

Artigo 11: Direito a um meio ambiente saudável

1. *Todos têm o direito de viver em um ambiente saudável e de ter acesso a serviços públicos básicos.*
2. *Os Estados Partes promoverão a proteção, a preservação e a melhoria do meio ambiente, preservação e melhoria do meio ambiente⁵⁰.*

As inovações trazidas pelo artigo 11 do Protocolo de São Salvador resultaram em ações constantes voltadas à conservação ambiental. A proteção do meio ambiente em todos os seus componentes foi objeto de discussão, pois traçou-se como objetivo

“a) garantir a todas as pessoas, sem discriminação alguma, um meio ambiente saudável para viver; b) garantir a todas as pessoas, sem discriminação alguma, serviços públicos básicos; c) promover a proteção do meio ambiente; d) promover a

⁵⁰ ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Organização dos Estados Americanos, Protocolo de São Salvador. Disponível em: <https://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/docs/protocolo-san-salvador-es.pdf>. Acesso em: 24/09/2023.

preservação do meio ambiente; e) promover o melhoramento do meio ambiente” (MESQUITA, 2013).

Com essa disposição, o direito ao meio ambiente passou a ser considerado um direito humano, o qual é universal, inalienável, irrenunciável, indivisível, extrapatrimonial, dentre outros.

Além das Conferências, Tratados e Convenções, a Organização das Nações Unidas, ONU, através de sua Assembleia Geral, adotou a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Os 17 objetivos têm como principal função a integração social, econômica e ambiental, com foco nas populações mais vulneráveis por meio de compromisso comum e universal dos países⁵¹. Com isso, há maior mobilização por parte dos Estados membros da ONU para proteção e preservação ambiental, pautado pelo desenvolvimento sustentável.

Em meio a toda a evolução da proteção internacional, os países começaram a alterar o direito interno de maneira a adaptar e criar as legislações nacionais com as diretrizes internacionais de proteção ambiental, de maneira a garantir o equilíbrio ambiental, como o Brasil e a Argentina.

3. A evolução do direito ambiental no Brasil

Em âmbito interno brasileiro, o direito ambiental evoluiu de maneira significativa, através de um conjunto normativo robusto de proteção e diretrizes para o desenvolvimento sustentável e equilíbrio ecológico.

Para o jurista Benjamin⁵², a evolução histórica da proteção jurídica do direito ambiental brasileiro pode ser dividida em três fases: a) fase de exploração desregrada, b) fase fragmentária, e c) fase holística.

Em relação à fase da exploração desregrada, também conhecida como a fase individualista, não havia legislações que pautavam a questão da proteção ambiental. A exploração do meio ambiente ocorria de forma desenfreada, com objetivo exclusivamente de

⁵¹ ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. A Assembleia Geral adota a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Organização das Nações Unidas, ONU. Disponível em: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/#>. Acesso em: 28/09/2023.

⁵² Gabriel, Wedy. A evolução do Direito Ambiental e a sua definição no Brasil. Consultor Jurídico: 23 mar. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-mar-23/ambiente-juridico-evolucao-direito-ambiental-definicao-brasil>. Acesso em: 01/11/2023.

esgotamento dos recursos naturais e minerais. Além disso, as constituições brasileiras existentes à época não traziam de maneira explícita a necessidade de conservação ambiental e proteção dos recursos, fato que consolidava ações de exploração ambiental.

Já na fase fragmentária, algumas legislações importantes começaram a surgir para pautar determinadas questões em relação ao meio ambiente, ainda que de maneira esparsa e tímida. Importante destacar que neste período foi instituído o Código Florestal de 1965, Lei nº 4.771/1965. Esse diploma normativo representou um avanço expressivo naquela época, pois o artigo 1º dispôs sobre a proteção das florestas existentes:

Art. 1º As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

Por essa disposição do artigo 1º, o direito de propriedade foi limitado em prol da conservação ambiental das florestas e demais formas de vegetação, por serem consideradas bens de interesse comum a todos, ou seja, o meio ambiente como bem comum.

Outro avanço legislativo na fase fragmentária foi a promulgação do Código de Pesca, Decreto-Lei nº 221/1967, dispondo sobre a proteção e estímulo à pesca em território nacional brasileiro. Essa legislação inovou ao impor a necessidade de licença anual para o exercício da pesca de amadores e cientistas, como forma de controlar a atuação pesqueira no Brasil.

O Código de Mineração também de 1967, Decreto-Lei nº 227/1967, foi outro texto normativo que impactou de maneira significativa a temática do meio ambiente, ao impor condições para o exercício da atividade de mineração no Brasil, alinhando o desenvolvimento da atividade econômica com a proteção do meio ambiente, conforme dispõe o artigo 6º-A.

Art. 6º-A. A atividade de mineração abrange a pesquisa, a lavra, o desenvolvimento da mina, o beneficiamento, o armazenamento de estéreis e rejeitos e o transporte e a comercialização dos minérios, mantida a responsabilidade do titular da concessão diante das obrigações deste Decreto- Lei até o fechamento da mina, que

deverá ser obrigatoriamente convalidado pelo órgão regulador da mineração e pelo órgão ambiental licenciador.

Parágrafo único. O exercício da atividade de mineração inclui:

I - a responsabilidade do minerador pela prevenção, mitigação e compensação dos impactos ambientais decorrentes dessa atividade, contemplando aqueles relativos ao bem-estar das comunidades envolvidas e ao desenvolvimento sustentável no entorno da mina;

II - a preservação da saúde e da segurança dos trabalhadores;

III - a prevenção de desastres ambientais, incluindo a elaboração e a implantação do plano de contingência ou de documento correlato; e

IV - a recuperação ambiental das áreas impactadas.

A Lei de Responsabilidade por Danos Nucleares, Lei n° 6.453/1977, também surgiu nessa fase como uma maneira de atribuir a responsabilidade civil por danos nucleares e a responsabilidade criminal por atos relacionados à atividade nuclear desenvolvida em território brasileiro.

Ainda na fase fragmentária, a Lei de Zoneamento Industrial nas Áreas Críticas de Poluição, Lei n° 6.803/1980, inovou ao trazer as diretrizes básicas para o zoneamento industrial em áreas críticas de poluição. Essa legislação prescreveu em seu artigo 1° a necessidade de compatibilizar o desenvolvimento das atividades industriais com a proteção ambiental em regiões onde houver a instalação de indústrias.

Art. 1° Nas áreas críticas de poluição a que se refere o art. 4° do Decreto-lei n° 1.413, de 14 de agosto de 1975, as zonas destinadas à instalação de indústrias serão definidas em esquema de zoneamento urbano, aprovado por lei, que compatibilize as atividades industriais com a proteção ambiental.

Outra inovação trazida nesse período, foi a promulgação da Lei de Agrotóxicos de 1989, Lei n° 7.802/1989. Dentre as disposições trazidas por esta Lei, a proibição de registros de agrotóxicos que provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública e cujas

características causem danos ao meio ambiente foi um ponto crucial para manutenção ambiental.

- Art. 2º, § 6º Fica proibido o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins:*
- a) para os quais o Brasil não disponha de métodos para desativação de seus componentes, de modo a impedir que os seus resíduos remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública;*
 - f) cujas características causem danos ao meio ambiente.*

Por fim, como uma maneira de permitir a participação do cidadão nos atos de defesa ao meio ambiente, foi instituída a Lei nº 4.717/1965, a qual regulamenta a Ação Popular. Esse diploma normativo trouxe a possibilidade de qualquer cidadão brasileiro pleitear a anulação de ato lesivo ao meio ambiente. Esse direito foi posteriormente consagrado na Constituição Federal de 1988 como direito fundamental, elencado no artigo 5º, inciso LXXIII. A Ação Popular representou um marco no ordenamento jurídico brasileiro pois é considerada um dos principais instrumentos de uso do cidadão para tutela de direitos e interesses difusos e coletivos, como a defesa do meio ambiente.

Em relação à terceira fase, a fase holística, o meio ambiente passou a ser considerado de maneira integrada, ou seja, os componentes ambientais possuem interdependência e não mais têm a proteção está fragmentada em áreas específicas. A pauta ambiental é vista como um sistema ecológico integrado, garantindo a conservação nas diversas formas.

A legislação que marcou essa fase, foi a promulgação da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938/1981. Esse diploma normativo trouxe o conceito de meio ambiente como uma forma de assegurar a dignidade da vida humana. Além disso, um dos objetivos centrais da Política Nacional do Meio Ambiente é compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico⁵³.

Outro ponto importante da Política Nacional do Meio Ambiente foi a criação de órgãos para monitorar e fiscalizar as ações de proteção e conservação do meio ambiente. Por

⁵³ Lei nº 6.938/1981, Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.

esse texto normativo, foi criado o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. Esse órgão:

“é a estrutura adotada para a gestão ambiental no Brasil, e é formado pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios responsáveis pela proteção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental no Brasil” (PODER EXECUTIVO, 2016).

Como órgão integrador do SISNAMA, há o CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, o qual:

Art. 6º, II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;

Nota-se, então, que a criação da Política Nacional do Meio Ambiente inovou ao criar uma estrutura de proteção ambiental no Brasil, através de órgãos e secretarias com a finalidade de fazer cumprir as ações voltadas à conservação do meio ambiente, aliando o desenvolvimento econômico com medidas de preservação ambiental.

Por outro lado, embora houvesse legislações consolidadas em diversas áreas para conservação do meio ambiente durante as duas últimas fases descritas, nada havia a nível constitucional, ou seja, as leis infraconstitucionais eram encarregadas de gerir a proteção ambiental no Brasil. A Constituição Federal de 1967 nada abordava acerca do meio ambiente, por estar limitada majoritariamente às normas de organização do Estado. Esse fato representava um vazio normativo da Carta Magna sobre a temática ambiental.

Porém, com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a temática ambiental foi inserida diretamente no texto constitucional. De início, a Carta Magna trouxe como competência comum dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a proteção do meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de

suas formas e a preservação da fauna e da flora⁵⁴. Além disso, o texto constitucional de 1988 trouxe como função institucional do Ministério Pública promover inquérito civil e ação civil pública para proteção do meio ambiente⁵⁵.

Como forma de conciliar o desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente, a Constituição Federal de 1988 trouxe como princípio da ordem econômica a defesa do meio ambiente, com tratamento diferenciado de acordo com o impacto ambiental dos produtos e serviços⁵⁶. Ademais, incluiu em seu texto os requisitos para que a propriedade rural cumpra sua função social, sendo um deles a utilização adequada de recursos naturais e a preservação do meio ambiente⁵⁷.

Além de todas essas disposições, a inovação de maior relevância em matéria ambiental, foi a inclusão do Capítulo VI na Carta Magna de 1988, o qual é dedicado somente a questões relacionadas ao meio ambiente.

O artigo 225, caput, da Constituição Federal, prescreve o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, direito à conservação e proteção ambiental nas diversas dimensões e variações. Também, o mesmo dispositivo garante que o meio ambiente é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

Além das garantias em torno da proteção ambiental, o artigo 225 trás ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e proteger o meio ambiente. Por isso, observa-se que, ao mesmo tempo, todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, mas têm o dever de garantir a manutenção e a conservação. Essa necessidade de defesa e preservação do meio ambiente por parte do Poder Público e da coletividade não se limita ao tempo presente, mas as futuras gerações.

⁵⁴ Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

⁵⁵ Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

⁵⁶ Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.

⁵⁷ Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente.

Outras disposições do artigo 225 apontam a necessidade do Poder Público preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, além de fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e a manipulação de material genético⁵⁸. Também, há a imposição legal de realizar o estudo prévio de impacto ambiental para instalação de obra potencialmente causadora de degradação ambiental⁵⁹.

Como forma de incentivar a participação social e a conscientização ambiental, o artigo 225 dispõe que o Poder Público deve promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino para preservação do meio ambiente⁶⁰. Essa prescrição está alinhada à necessidade de preservar o meio ambiente no presente e para as gerações futuras.

Diante de todo avanço legislativo e constitucional do direito ambiental no Brasil, é importante ressaltar o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o qual é tratado como direito de terceira geração, contido no rol dos valores de solidariedade.

Logo, ao passo que o meio ambiente preservado é um direito, há o dever mantê-lo conservado e preservado.

4. A evolução do direito ambiental na Argentina

Assim como no Brasil, a Argentina implementou avanços significativos em sua legislação interna, mesmo diante da multiplicidade temática em torno do meio ambiente. Para compreender a relação da República Argentina com o meio ambiente, é necessário entender a proteção ambiental a partir de “una postura sistémica e integral del ambiente como una unidad, conformada por varios elementos interrelacionados en la que, además, también tiene inclusión el patrimonio cultural. Por lo tanto, cuando nos referimos a cuestiones de competencia sobre los recursos naturales no hacemos distinciones respecto de aquellos que (como por ej. los minerales) presenten características distintivas y marco regulador específico, sino que hablamos de un conjunto comprensivo e inclusivo de todos los recursos naturales (suelo, aire, bosques, atmósfera, biodiversidad, agua, etc.)⁶¹” (SALERNO, 2000).

⁵⁸ Art. 225, § 1º, II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético.

⁵⁹ Art. 225, § 1º, IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.

⁶⁰ Art. 225, § 1º, VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.

⁶¹ Traduzido com DeepL.com/Translator: “uma visão sistémica e holística do ambiente como uma unidade, composta por vários elementos inter-relacionados, nos quais se inclui, além disso, o património cultural. Por

Com essa concepção, observa-se que o meio ambiente está integrado por um conjunto dinâmico e complexo de componentes, os quais estão em constante relação.

A evolução da proteção ambiental na Argentina iniciou-se antes mesmo da Reforma Constitucional de 1994. O Código de Mineração argentino, Lei 1919/1887, trouxe disposições acerca da exploração das minas em todo território nacional. Embora seja objeto de inúmeras críticas, a legislação referida tratou sobre o meio ambiente, inserindo no artigo 207⁶² a necessidade de apresentação de um plano de restauração do espaço natural afetado por resíduos minerais, sob pena de sanção, que não se limita às sanções impostas pelo Código, mas pode estar em normas de proteção ao meio ambiente. Além disso, no artigo 243, “e”, dispôs que as infrações de preservação do ambiente estão sujeitas a multa⁶³.

Ademais, um ponto de destaque sobre o Código de Mineração é a Segunda Seção que trata especificamente da proteção ambiental no desenvolvimento da atividade mineradora, incluindo artigos que prescrevem a responsabilidade do agente explorador por danos ambientais. Essa responsabilidade trazida inclui o dever de mitigar o dano, reabilitação, restauração e recomposição da área degradada⁶⁴.

consequente, quando nos referimos a questões de competência em matéria de recursos naturais, não distinguimos entre os recursos (por exemplo, minerais) que têm características distintivas e um quadro regulamentar específico, mas falamos antes de um conjunto abrangente e inclusivo de todos os recursos naturais (solo, ar, florestas, atmosfera, biodiversidade, água, etc.)”.

⁶² Art. 207: Quienes exploten minas que contengan minerales nucleares quedan obligados a presentar ante la autoridad minera un plan de restauración del espacio natural afectado por los residuos mineros y a neutralizar, conservar o preservar los relaves o colas líquidas o sólidas y otros productos de procesamiento que posean elementos radioactivos o ácidos, cumpliendo las normas aplicables según la legislación vigente y en su defecto las que convenga con la autoridad minera o el organismo que por ley se designe. Los productos referidos anteriormente no podrán ser reutilizados ni concedidos para otro fin sin la previa autorización del organismo referido y de la autoridad minera. El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo precedente será sancionado, según los casos, con la clausura temporal o definitiva del establecimiento, la caducidad de la concesión o autorización obtenida y/o la imposición de multas progresivas que podrán alcanzar hasta un máximo de CINCO MIL (5.000) veces el valor del canon anual correspondiente a una pertenencia ordinaria de sustancias de la primera categoría, además de la responsabilidad integral por los daños y perjuicios que por su incumplimiento se hubieren originado y/o por los costos que fuera necesario afrontar para prevenir o reparar tales daños, conforme a la reglamentación que dicte el PODER EJECUTIVO NACIONAL, sin perjuicio de las sanciones que pudieren establecer las normas de protección del medio ambiente aplicables y las disposiciones penales.

⁶³ Art. 243, e): Las infracciones a lo dispuesto en los artículos anteriores serán penadas: e) Las infracciones a los reglamentos de policía minera y de preservación del ambiente, serán penadas con una multa cuyo monto será TRES (3) a QUINCE (15) veces el canon que devengare la mina, si no tuvieren otras sanciones previstas en tales reglamentos.

⁶⁴ Art. 263: Sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que establezcan las normas vigentes, todo el que causare daño actual o residual al patrimonio ambiental, estará obligado a mitigarlo, rehabilitarlo, restaurarlo o recomponerlo, según correspondiere.

Apesar de haver legislações que regulam especificamente sobre um determinado tema, o principal avanço em matéria ambiental na Argentina foi a inclusão do artigo 41 na Constituição da Nação Argentina com a Reforma Constitucional de 1994. Como forma de garantir o direito ao meio ambiente, esse artigo dispõe o direito ao meio ambiente saudável, equilibrado e apto para o desenvolvimento humano. Também, aponta a necessidade de preservação e proteção ambiental para as gerações futuras, impondo à coletividade o dever de não comprometer o meio ambiente e prescreve a obrigação de recomposição em caso de danos ambientais causados⁶⁵.

A Constituição argentina não só impõe a todas as pessoas o dever de conservação ambiental, como também atribui a competência às autoridades de prover a proteção do direito ao meio ambiente, a utilização racional dos recursos naturais, a preservação do patrimônio natural e cultural e a diversidade biológica, a informação e a educação ambiental⁶⁶.

Além dessas disposições, o artigo 41 traz a atribuição da nação de ditar normas que contenham os pressupostos mínimos de proteção ambiental. Esse conceito inserido no texto constitucional é objeto de grandes controvérsias e discussões, mas pode-se dizer que são disposições legais mínimas que permitem o desenvolvimento humano de maneira sustentável.

Para Juliá, o conceito de pressupostos mínimos de proteção ambiental abarca três concepções:

“Una posición restrictiva donde el alcance de este concepto está limitado a un piso o umbral fijado por valores o límites equiparables a estándares, y no puede regularse nada más bajo que este punto mínimo.

Una posición intermedia que si bien es coincidente en la necesidad de fijar límites y valores entiende que el concepto puede albergar algunos principios y la formulación

⁶⁵ Art. 41: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

⁶⁶ Art. 41: Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

de instrumentos de gestión uniforme, y en algún caso la guía de objetivos políticos mínimos.

Una posición amplia que comprende que es una verdadera delegación de la temática ambiental y, por lo tanto, bajo el rubro de presupuestos mínimos podría incluirse, menos la legislación común que está delegada a la Nación, todos los aspectos”⁶⁷.

Embora seja um conceito aberto e sujeito a diferentes interpretações, os pressupostos mínimos são garantias que permitem o pleno desenvolvimento do ser humano como titular do direito ao meio ambiente. Logo, a proteção e conservação ambiental de maneira saudável e apta à promoção de qualidade de vida, são direitos mínimos inerentes à coletividade, não só de uma perspectiva atual, mas de maneira a garantir o desenvolvimento sustentável para as futuras gerações.

Outro aspecto de importância estabelecido no artigo 41, é a competência para as províncias ditarem normas complementares à Constituição da Nação Argentina a respeito desses pressupostos mínimos estabelecidos, observando as características regionais. Como exemplo, a Constituição da Província de Buenos Aires impõe em seu artigo 28 um direito-dever, o qual é caracterizado pelo direito ao meio ambiente saudável e o dever de conservá-lo e protegê-lo em seu proveito e as futuras gerações⁶⁸.

Posteriormente a essas inovações trazidas pela Reforma Constitucional de 1994, foi criada a Política Ambiental Nacional da Argentina, Lei 25.675/2002. Essa legislação trouxe um avanço significativo para gestão sustentável e adequada do meio ambiente, pois trouxe:

“Presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Principios de la política ambiental. Presupuesto mínimo.

⁶⁷ Traduzido com DeepL: Uma posição restritiva em que o âmbito de aplicação deste conceito se limita a um piso ou limiar fixado por valores ou limites comparáveis a normas, não podendo ser regulamentado nada abaixo deste ponto mínimo.

Uma posição intermédia que, embora concorde com a necessidade de estabelecer limites e valores, entende que o conceito pode incluir alguns princípios e a formulação de instrumentos de gestão uniformes e, em alguns casos, a orientação de objetivos políticos mínimos.

Uma posição ampla que entende que se trata de uma verdadeira delegação das questões ambientais e que, portanto, sob o título de orçamentos mínimos, todos os aspectos poderiam ser incluídos, exceto a legislação comum que é delegada à Nação.

⁶⁸ Art. 28: Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras.

Competencia judicial. Instrumentos de política y gestión. Ordenamiento ambiental. Evaluación de impacto ambiental. Educación e información. Participación ciudadana. Seguro ambiental y fondo de restauración. Sistema Federal Ambiental. Ratificación de acuerdos federales. Autogestión. Daño ambiental. Fondo de Compensación Ambiental”⁶⁹.

A Política Nacional Ambiental traz como objetivo a preservação, conservação, recuperação e melhoramento da qualidade dos recursos ambientais, sejam naturais ou culturais, na realização das diferentes atividades, aliada a necessidade de melhoramento da qualidade de vida e do meio ambiente para as gerações presentes e futuras.

Também, a Lei 25.675/2002 institui no artigo 4º princípios para direcionar as ações para que sejam executadas a Política Ambiental, os quais são os princípios da congruência, da prevenção, precaução, equidade, progressividade, responsabilidade, subsidiariedade, sustentabilidade, solidariedade e cooperação. Esses princípios descritos na legislação são objetos de parâmetros para interpretação e aplicação da respectiva lei.

Extraído o conceito do artigo 41 da Constituição da Nação Argentina, a Lei 25.675/2005 aborda a definição dos pressupostos mínimos, que:

“Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable”⁷⁰.

⁶⁹ Traduzido com DeepL: Requisitos mínimos para a realização de uma gestão sustentável e adequada do ambiente, a preservação e proteção da diversidade biológica e a aplicação do desenvolvimento sustentável. Princípios da política ambiental. Orçamento mínimo. Competência judicial. Instrumentos de política e de gestão. Gestão ambiental. Avaliação do impacto ambiental. Educação e informação. Participação dos cidadãos. Seguro ambiental e fundo de recuperação. Sistema federal do ambiente. Ratificação de acordos federais. Autogestão. Danos ambientais. Fundo de compensação ambiental.

⁷⁰ Traduzido com DeepL: O pressuposto mínimo, estabelecido no artigo 41 da Constituição Nacional, é entendido como toda norma que confere proteção ambiental uniforme ou comum a todo o território nacional, e tem por objetivo impor as condições necessárias para assegurar a proteção ambiental. Em seu conteúdo, deve prever as condições necessárias para garantir a dinâmica dos sistemas ecológicos, manter sua capacidade de suporte e, em geral, assegurar a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.

A referida legislação trouxe uma inovação importante para o território argentino, que é a criação do Conselho Federal de Meio Ambiente - COFEMA. Esse conselho conta com a atribuição de desenvolver uma estrutura de funcionamento global do território da Nação Argentina, através de coordenação interjurisdiccional entre os municípios e as províncias e em conciliação com os diferentes setores da sociedade.

O artigo 11⁷¹ da Política Nacional Ambiental prescreve a necessidade de avaliação de impacto ambiental de obras ou atividades que sejam susceptíveis de degradar o meio ambiente, seus componentes, ou afetar a qualidade de vida. Esse estudo deve ser prévio à execução da obra ou da atividade, pois em meio a incerteza científica do potencial risco a ser causado, não é passível de realizar.

Como maneira de integrar e fomentar a participação social nas questões atinentes ao meio ambiente, a Política Nacional Ambiental prescreve a necessidade de educação ambiental, como forma de preservação dos recursos naturais e o uso sustentável, a fim de melhorar a qualidade de vida da população⁷².

Por fim, a Lei 25.675/2005 traz dispositivos relacionados aos danos ambientais causados que impactam diretamente o meio ambiente. Para isso, qualquer ato jurídico, lícito ou não, através de ação ou omissão, deve ser responsabilizado de maneira objetiva, restabelecendo o estado anterior a sua produção. Em caso de impossibilidade de retornar ao status quo, será devido o quantum indenizatório para reparação do dano produzido, o qual será destinado ao Fundo de Compensação Ambiental, sem prejuízo de outras sanções judiciais que podem ser fixadas pelos juízes⁷³.

Diante de todo avanço legislativo e constitucional do direito ambiental na Argentina, é importante ressaltar o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,

⁷¹ Artículo 11: Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución.

⁷² Artículos 14: La educación ambiental constituye el instrumento básico para generar en los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población.

⁷³ Artículo 28: El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por la presente, el cual será administrado por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder.

o qual deve permitir o desenvolvimento humano de forma sustentável. Por outro lado, esse direito impõe um dever, que é de conservação e proteção para as gerações presentes e futuras.

5. Conclusão

As transformações sociais com o avanço tecnológico ocasionaram consequências significativas ao meio ambiente. A possibilidade de exploração dos recursos minerais e energéticos fez com que a poluição e a degradação ambiental crescessem em escala global. Por isso, os Estados se viram diante da necessidade de traçar parâmetros internacionais para conservação e preservação do meio ambiente.

Embora as primeiras Conferências, como a Conferência de Estocolmo, não tivessem caráter obrigatório com sanção pelo descumprimento das diretrizes, denominado soft law, foi criada uma orientação aos países para tratar da exploração ambiental, com princípios e instruções. Ademais, foi instituído o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, com objetivo de traçar ações de proteção ao meio ambiente, o qual representou um avanço significativo à época.

Posteriormente ao avanço internacional da proteção ambiental, a adoção do meio ambiente como um Direito Humano através do Protocolo de São Salvador em âmbito regional, foi um marco evolutivo através do qual o meio ambiente passou a ser protegido em todos os seus componentes, como forma de garantir o desenvolvimento humano.

Em meio a essa mudança no cenário internacional, os países como Brasil e Argentina criaram leis que impactam diretamente na conservação e proteção do meio ambiente através de seus componentes. Esses países apresentam questões em comum sobre a proteção ambiental, principalmente com ações voltadas à conservação ambiental não só para as gerações presentes, mas para as gerações futuras.

Além disso, ambos os países trazem em suas legislações um órgão central a nível nacional com a finalidade de traçar diretrizes sobre o meio ambiente e auxiliar os diferentes setores sociais na elaboração de políticas de conservação e proteção ambiental.

Em âmbito brasileiro há o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) e o COFEMA (Conselho Federal do Meio Ambiente) a nível argentino.

A necessidade de integração e realização das atividades envolvendo os setores sociais, fez com que Brasil e Argentina implementassem políticas de educação ambiental, como forma de melhorar a qualidade de vida da população em aspectos gerais através do cuidado e conservação do meio ambiente. Ademais, impôs a obrigatoriedade de realização de estudo prévio de impacto ambiental para realização de obras e atividades que ofereçam riscos de degradação ambiental e seus componentes, a fim de verificar e dimensionar o potencial risco a ser causado, implicando na não realização da atividade ou obra a depender da extensão do dano.

Diante do exposto, nota-se que os países como Brasil e Argentina apresentam uma evolução significativa nas legislações internas acerca da conservação ambiental. Porém, é necessário destacar que, apesar de todo conjunto de ações voltadas à preservação do meio ambiente, as medidas precisam ser mais eficazes, de forma a garantir um meio ambiente equilibrado e saudável em âmbito nacional e global.

IMPLEMENTATION AND PROTECTION OF CHILD RIGHTS IN SRI LANKA A HISTORICAL OVERVIEW

Raveenthiran Vivekanantharasa

Abstract

All over the world, the concept of “Child Rights” has been prioritized since the convention on the rights of children took place in 1990. Sri Lanka also introduced the legislations and protocols made based on the rights of children since its independence from different colonials and before that. This article clearly explains the historical overview of the development of rights of children in Sri Lanka since colonial started ruling the country in 16th century up to now. Moreover, this article mainly focuses on how child rights are implemented and protected in Sri Lanka and what type of initiatives are being taken by different government and non-government organizations in Sri Lanka. Under more than 400 years of colonials ruling, child rights were implemented and protected with various activities. Under colonialism, Portuguese, Dutch, and British rulers had their control and activities. After independence from British rulers in 1948, Sri Lanka’s efforts play a pivotal role in safeguarding and developing the rights of children along with various steps. Many national and international organizations helped for that. Especially, the steps taken by Sri Lankan government to implement and protects the rights of children to safeguard children with special needs are significant.

Keywords

Colonials - Rights of children – Initiatives - Children with special needs

Resumen

En todo el mundo, el concepto de “Derechos del Niño” ha sido priorizado desde que se firmó la convención sobre los derechos del niño en 1990. Sri Lanka también introdujo legislaciones y protocolos basados en los derechos del niño desde su independencia de diferentes colonias. Este artículo explica claramente la descripción histórica del desarrollo de los derechos de los niños en Sri Lanka desde que la colonia comenzó a gobernar el país en el siglo XVI hasta la actualidad. Además, se centra principalmente en cómo se implementan y protegen los derechos del niño en Sri Lanka y qué tipo de iniciativas están tomando diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el Estado. Durante más de 400 años de dominio colonial, los derechos del niño se implementaron y protegieron a través diversas actividades. Bajo el colonialismo, los gobernantes portugueses, holandeses y británicos tenían su control y sus actividades. Después de independizarse de los gobernantes británicos en 1948, los esfuerzos de Sri Lanka desempeñan un papel fundamental en la salvaguardia y el desarrollo de los derechos de los niños junto con diversas medidas. Para ello ayudaron muchas organizaciones nacionales e internacionales. Especialmente, son importantes las medidas adoptadas por el gobierno de Sri Lanka para implementar y proteger los derechos de los niños con necesidades especiales.

Palabras clave

Colonia – Derechos del niño – Niños con necesidades especiales

1. Introduction. Meaning of Child Rights

According to UNICEF, Children’s rights are the civil, political, economic, social, and cultural rights that all children everywhere are entitled to. These rights are set out in the United Nations Convention on the Rights of the Child.

Child rights are specialized human rights that apply to all human beings under the age of 18. So, the importance of child rights plays a vital role in safeguarding them from various factors, rather misusing them. As a developing country the importance given by Sri Lanka to the development of child rights is taking an importance stand all over the country.

Children's rights are the perceived human rights of children with particular attention to the rights of special protection and care afforded to the young, including their right to association with both biological parents, human identity as well as the basic needs for food, universal state-paid education, health care and criminal laws appropriate for the age and development of the child(Hitaishi Singh,Jaya Bharti,2021).

According to Centre for Child Protection, a right is as an agreement or contract established between the persons who hold a right (often referred to as the "rights-holders") and the persons or institutions which then have obligations and responsibilities in relation to the realization of that right (often referred to as the "duty- bearers").

Though the ancient time of Sri Lanka had not been taken more steps to safeguard and develop the rights of children, people were keen on many activities for proper implementation of the proper safeguard of the rights of children developing different aspects on that. People took interest to give proper education for their children. This took place in Sinhala, Tamil and Muslim communities of Sri Lanka. Parents considered their children as asset and showered their love for the betterment of their life. In short, it means that family relationship parlayed a major role in safeguarding and developing the rights of children. Especially, parents gave more prominence in the development and safeguard of the rights of children with special needs. Ancient chronicles of Sri Lanka such as Vansa Katha and Rasavahini reveal that education was organized and given to children in different levels. Household system of education was implemented for children who were taught the subjects such as Sanskrit, Medical Science, Agriculture and various crafts. So, this way of treating children for their betterment and safeguard led following periods with colonials to develop rights of children successfully.

According to K.B.N. De Silva (2021), The legislation on children's rights dates to the colonial era, and the Code of Conduct, first enacted in 1883, provides for the protection of children. According to Sections 75 and 76 of the Sri Lankan Penal Code, any act committed

by a child under the age of 8 years or any act committed by a child under the age of 8 years who is not sufficiently mature but under the age of 12 is not considered to be a crime under the law. It is also a punishable offence for a parent or guardian to give up a child under 12 years of age.

2. Background of the article

This article focuses on the historical overview of development of rights of children since different colonials' periods up to now. Each colonial ruled Sri Lanka made so many changes in different fields. In them, safeguarding rights of children is important. For that, they implemented many legislations and protocols successfully. Portuguese, Dutch and British are the colonials ruled Sri Lanka over 400 years. So, the purpose of this article is to analyze the contribution of each colonial in Sri Lanka and their contribution to develop the concept after their ruling period.

3. Methodology

This article is written using the qualitative method of data gathering. According to the title of the article, the data were gathered through a systematic review of literature. The method of documents analysis was used in line with the data gathering. Various articles, books, government regulations and documents were reviewed to find more details. The review of literature to collect data gave more ideas of Child Rights from different ruling of colonials to present time in Sri Lanka

4. Aim and Objectives of the Article

The main aim of this article is to analyze the initiatives of Child Rights taken by different colonials in Sri Lanka and its impact at present. Based on the aim of the article, the objectives are divided to find out the initiatives that were taken under each colonial such as The Portuguese, The Dutch, and The British. Moreover, the impact of the initiatives of colonials at present.

5. Child Rights under Different Colonials in Sri Lanka

The Portuguese period (1505-1658)

Portuguese are the first foreigners invaded Sri Lanka in 1505 up to 1658. Though their main purpose was business and religious conversion, they did many changes in developing the country. Their development was on different areas, such as education, law, religion and protecting children's rights. How were the efforts of Portuguese contributed for the development of rights of children? It is a main question that we should ask when we consider the importance of Portuguese time in Sri Lanka. Portuguese paved the ways to implement and safeguard rights of children with other colonials, such as Dutch and British and even after the colonial's time.

The Dutch period (1658-1796)

With all changes in different aspects of the country by Portuguese, The Dutch captured the country as second colonial in the country from Portuguese in 1658. The Dutch judicial system was well organized and they developed the country with that. Moreover, there were three major courts of justice in Portuguese period, in Colombo, Galle, and Jaffna. In the various districts, the provincial head (the dissava) presided over the circuit court, called the Land Raad. Native chiefs were invited to hear cases involving local custom. The customary law of the land was administered in the courts, unless it clashed violently with Dutch jurisprudence. This effort made Portuguese to safeguard rights of children.

Moreover, in Dutch period Roman -Dutch law had important social consequence to ensure rights of children in Sri Lanka. The Dutch introduced their own laws to the island. The Roman Dutch law is considered to be one of the developed legal systems of Europe. It was introduced to Sri Lanka by the Dutch. This legal system recognized that the parents exercised power over their children. It also accepted the responsibility and authority of the courts to act as "parent's patria" or "upper Guardian" of all children (The Open university of Sri Lanka, 2010).

The Dutch established the orphan chamber known as Weeskamer. It was a special tribunal to administer the property of Dutch minors who were orphans. These were found in Galle, Colombo and Jaffna".The Dutch established another tribunal known as Boedelkamers

to take care of the property of local orphans. These were found in Colombo, Jaffna, Galle, Negombo, Matara and Trincomalee. ¹²An official known as Weesmaster was appointed. He had the authority to permit the property of minors to remain in the hands of parents or guardians providing security until minors came of age (The Open University of Sri Lanka, 2010).

The law relating to guardianship and custody of minor children in Sri Lanka has been strongly influenced by Roman-Dutch law and, to a lesser extent, by English law. The law differentiates between custody over legitimate and illegitimate children. In regard to the latter, Sri Lankan law recognizes the Roman-Dutch law principle that the mother makes no bastard and the mother of an illegitimate child has a natural right to custody as opposed to the father's right. This right can be interfered with only by the court acting as upper guardian of minors (Ruwantissa Abeyratne et.al, 1984).

After Portuguese and Dutch colonials, British ruled Sri Lanka and made many changes in various fields in the country. British period was considered as golden time of ruling with the changes made by British rulers. According to various studies, it shows that parents had more control on their children with the rights they had over them. Therefore, the Dutch period was an important period of safeguarding rights of children in various ways through implementing various legislations and protocols. This happened the following period of British ruling to more focus on rights of children.

The British Period (1796-1948)

The British period started in 1796 in Sri Lanka after the Dutch period of ruling. They were the key people in systemizing and implementing rights of children properly. They did not continue the orphan chambers nor did they control the work of guardians of children's property. But they introduced important legislation in every sphere, continued with the Roman Dutch law and also the customary laws such as Kandyan law, Tesawalama and the Muslim law. The British introduced Roman Dutch law values into the legal of the country, through the courts that they established. The Roman Dutch law did not have a developed concept of rights of children (The Open University of Sri Lanka, 2010).

Child - centered approach in legislation was a main point in British period. The legislation structure of the country could interfere in all aspects of children and with that, the court took charge of all general rights of children, such as education, health, protection, and morals of children. Children were treated with the guardians when they face challenges in accomplishing their basic rights. In 1889 a special court ordinance conferred the jurisdiction in respect of minors on the District Court. Moreover, different legislations introduced in British period took the status of children towards a good level. Those legislations are,

1. The charter of Justice of 1801
2. The courts ordinance of 1889
3. A clear child welfare policy in 1930
4. Education ordinance of 1939
5. The Adoption of Children's Ordinance in 1941 (Child Rights: The Sri Lankan Experience, 1998).

Moreover, during British period parents were advised to ensure rights of children. If they fail to ensure that, they would have punished with the law of the country. Likewise British ruling time in Sri Lanka was an important period in various aspects, especially in safeguarding rights of children. This made the following period of Sri Lanka with more concern on rights of children.

6. Child Rights in Post independence time of Sri Lanka

After the attainment of independence from British rulers, Sri Lanka is taking more initial steps in safeguarding child rights with more legislations and protocols. The first step was the introduction of the employment of women, young person, and children were introduced in 1956. It defined the employment age of children less than 14 years as a prohibited age to be employed in any ways. This is an important step in safeguarding rights of children related to employment opportunity. Moreover, The Legitimacy Act (1970) provided for a child born outside the marriage to get the status of legitimacy if the parents married subsequently. Another important act for the safeguard of children is maintenance

ordinance, which was amended in 1972 and minor children to get more realistic ideas of their maintenance. In 1923, the married women's property ordinance was introduced and made obligation for married women with separate property to maintain her minor children in the event of the death of the husband.

In the past, there was no standardized method of protecting children. They were raised in difficult and unsanitary living conditions and engaged in perilous labour alongside their adult caretakers. At the end of the First World War in 1918, the need for better mechanisms to protect children raised. It was children and women who were the most affected by war, residing in an unsafe environment, being subject to various precarious post-war complications such as slave trade, mining, trafficking of children and employment of children to dangerous labour. It was identified that children's needs were much contrasting to those of adults, and that there needed to be a different set of mechanisms to ensure the safety of children (Achini pahalawatte,2021).

Moreover, in 1989 the United Nations adopted the convention on the rights of the child. The Sri Lankan government ratified the convention on 12th July 1990 and in 1991 signed the Global Plan of Action for Children. The Convention on the Rights of the Child has provided a new and dynamic framework for developing laws and policies to strengthen further the concept of right for children provided a basis for developing child rights to balance respect for the child and parental/adult interests can help to prevent the traditional idea of parental care being used, to ignore the rights of the child to respect for his/her special needs in society recognizes a range of rights for children within the scope of adult rights and responsibilities(The Open University of Sri Lanka,2010).

Sri Lanka has enshrined children's right to be protected from all forms of violence through its ratification of the UN Convention on the Rights of the Child (CRC). Building on this strong foundation, the Government has recently taken a number of landmark steps to build on this commitment. For example, the Government with UNICEF support completed a mapping the child protection system in 2016, and the National Child Protection Authority (NCPA) is currently drafting a National Policy on Child Protection. The decision to join the Global Partnership to End Violence Against Children as a pathfinder country further reaffirms Sri Lanka's commitment to keeping children safe(Unicef,2017).

Furthermore, National pal of action for children in Sri Lanka was introduced in Sri Lanka emphasized some important areas that need improvement. Children’s charter in 1992 introduced some important policy statement of children. In Sri Lanka a presidential task force was formed to abolish child abuse in 1996. In addition to that, a special hot line number was intruded to stop child abuse in 1997. So, these are the main importance steps made after colonials’ period up to 1997. Moreover, present conditions of the country in safeguarding rights of children are in a significant level. The establishment of Child Protection Authority is an important step to emphasize the above point that is mentioned here.

7. The role of National Child Protection Authority (NCPA)

An important milestone in safeguarding and protecting the children is the establishment of National Child Protection Authority (NCPA) in Sri Lanka. In December 1996, the Presidential Task Force on child protection was formed. This body recommended a number of legal amendments and administrative reforms, which were included in the report of the Presidential Task Force. One of the most prominent recommendations of the Presidential Task Force was the establishment of the National Child Protection Authority (NCPA), by ACT No.50 of 1998 under the Presidential Secretariat. National Child Protection Act: No 50 established the National Child Protection Authority for child protection. Its objectives are to prevent child abuse, protect and treat abused children, and develop and coordinate policies and actions to prevent child abuse (K.V.N Desilva, 2021).

To safeguard and protect children, the National Child Protection Authority was brought under the purview of the ministry of Woman and Child affairs; this ministry was established in the year 2006 in line with the rights of children. Establishing proper protection and welfare mechanism for children and women is the goal of this ministry in Sri Lanka. The vision and mission of the National Child Protection Authority are, “To create a child friendly and protective environment for children and “To ensure children are free from all forms of abuse”

Moreover, as another step, the National Child Protection Authority introduced “1929” as Child hot line number in July 2010. This number is the foremost point of contact for

vulnerable and victimized children who need help. The service is free, confidential, and offered 24 hours a day, 7 days a week for anyone across the island and provides an easy access. The 1929 child protection hot line number use is not only for the victimized children but also links children to appropriate services for their long-term care and rehabilitation. And this hot line number still plays a unique and important role in being privy to the true voices of children in Sri Lanka. Well-trained staffs are recruited for this service in government information centre and they take immediate action within 48 hours after getting any complaint on children. Those who can benefit from this hot line number are:

- Children affected by physical/ sexual/ emotional abuse
- Victims of child trafficking
- Children in conflict with law
- Child laborers – domestics in particular
- Children abandoned by parents or guardians
- Children whose families are undergoing/ have undergone traumatic incidents.
- Children who need emotional support and guidance (Government Information Centre, Sri Lanka).

Functions of the National Child Protection Authority (NCPA)

The NCPA has various functions; it is set up to:

1. Advise the Government in the formulation of a national policy on the prevention of child abuse and the protection and treatment of children who are victims of such abuse.
2. Advise the Government on measures for the prevention of child abuse.
3. Advise the Government on measures for the protection of the victims of such abuse.
4. Create an awareness, of the right of a child to be protected from abuse and the methods of preventing child abuse.
5. Consult the relevant ministries, provincial Councils, local authorities, district and divisional secretaries, public and private sector organizations and recommend all such

measures as are necessary, for the purpose of preventing child abuse and for protecting and safeguarding the interests of the victims of such abuse.

6. Recommend legal, administrative or other reforms required for the effective implementation of the national policy for the prevention of child abuse.
7. Monitor the implementation of laws relating to all forms of child abuse.
8. Monitor the progress of all investigations and criminal proceedings relating to child abuse.
9. Recommend measures to address the humanitarian concerns relating to children affected by armed conflict and the protection of such children, including measures for their mental and physical well-being and their re-integration into society.
10. Take appropriate steps where necessary for securing the safety and protection of (National Child Protection Authority, Sri Lanka). The above activities are ensured by National Child Protection Authority in Sri Lanka. Like this activities there are some activities too.

Moreover, Sri Lanka is stepping forward in prohibiting child marriage with the support of society, national and international organizations. In Sri Lanka only 10% of girls are married and in a union before the age of 18 and 1% are married and in a union before the age of 15. Based on the target of 5.3 sustainable development goal which is “eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilations” Sri Lanka has committed to eliminate child, early and forced marriage by 2030. Furthermore, Sri Lanka holds the membership of the South Asian Initiative to End Violence against Children (SAIEVAC) to safeguard and protect children ending the violence against them. Through the membership, a regional action plan to end child marriage was adopted to end child marriage between 2015 and 2018.

While Sri Lanka has not implemented the Convention through legislation, it has adopted a number of policies in recent years aimed at meeting the goals of the Convention, including the National Plan of Action for Children (2016–2020), the Action Plan for the Social Protection of Children (2016–2018) and the National Plan of Action to address Sexual and Gender-based Violence (2016–2020). Specific initiatives implemented under these plans

include a family foster care system, mechanism to identify and care for at-risk children, guidelines and training to strengthen social structures in support of children, improvements to inter-agency collaboration and expediting court cases involving children (Amanda Adamcheck, et.al, 2020).

Within the three decades since the ratification of the CRC, the government has made a few significant improvements with regards to child protection. Under the recommendation of the Presidential Task force the National Child Protection Authority (NCPA) was established in 1998 under the Presidential Secretariat. The Ministry of Women's Affairs included Child Development into the Ministry's legislation in 2006, and in 2015 the ministry was renamed as the Ministry of Women and Child Affairs, which is the government body responsible for implementing the UN Convention on the Rights of the Child. The Department of Probation and Child Care Services was established in 1956 and has been functioning under the ministry of Women and Child Affairs since 2015. Sri Lanka also reports to the CRC committee, explaining measures taken by the government towards protecting the rights of the child every five years (Achini pahalawatte, 2021).

In 2005, Sri Lanka joined in UN Security Council Resolution 1612 on children affected by armed conflict and agreed to report on progress regarding children affected by the conflict to the UN Secretary General. The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) asserted the Kathmandu Call to Action to End Child Marriage in Asia in 2014 including Sri Lanka. As a part of this commitment, Sri Lanka took many steps to end child marriage and established a uniform minimum legal age for marriage of 18. In 2016, with the support of civil society groups and UN agencies Sri Lanka's ministry of Woman and Child Affairs launched the National Action Plan to Address Sexual and Gender – based violence from 2016-2020. The main purpose of this action plan was combating child sexual exploitation and prevention of child marriage.

As a pathfinder country, Sri Lanka's aim is to build on the progress it has already made to prevent and address violence, and to provide a platform for renewed ambition to end violence against children. There is an opportunity to align national commitments with the ambitions of Agenda 2030 to end all forms of violence against children (SDG16.2) and related targets. Sri Lanka's efforts as a pathfinder country will be informed by a new

INSPIRE package of seven proven strategies to prevent violence against children that has been developed by WHO, UNICEF, UNODC, the World Bank, the Pan-American Health Organization, Together for Girls, and the Centers for Disease Control and Prevention. Drawing from decades of global research and lessons learned, the new INSPIRE strategies comprise: the implementation and enforcement of laws; norms and values; safe environments; parent and caregiver support; income and economic strengthening; response and support services; and education and life skills. These seven strategies are underpinned by two crosscutting strategies: multi-sectoral action and coordination as well as monitoring and evaluation.

Moreover, in 2019, government of Sri Lanka took steps costing National Action Plan to prohibit child sexual exploitation and abuse. Presently, legal laws, action plan of National Child Authority under the newly formed State Ministry of Women and Child Development, Pre-Schools & Primary Education, School Infrastructure & Education Services. Moreover, the activities, commitment of society, and support of national and international organizations play a vital role in safeguarding and protecting child rights. Today, there are more child rights concerns still to address in Sri Lanka. This includes all the aspect of the rights of children such as child abuse and violence in homes, schools, childcare homes and other settings, and abandonment. Aiming at 2030 sustainable development goal, one of Sri Lanka's main intentions is to be a country in which one can live happily and a country which ensures the rights of children with the support of the society and national and international organizations.

8. Conclusion

In a nutshell, from colonials' period to present time in Sri Lanka, the steps taken to implement and safeguard rights of children are important. This article clearly explains about that. The role of different local and international organization is inevitable in line with the protection of rights of children. Especially, National Child Protection Authority plays a pivotal role in safeguarding rights of children in Sri Lanka.